



**Derecho a la igualdad y
a la no discriminación**

Codina Clua, Pilar. Derecho de las mujeres: Las convenciones que no se aplican. En publicacion: Derechos Humanos en Paraguay 2005. Coordinadora Derechos Humanos Paraguay. CDE, Centro de Documentacion y Estudios, Asunción, Paraguay; Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) Diciembre. 2005.

Acceso al texto completo:

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/paraguay/cde/cde2005/7igualdad.pdf>

Derecho de las mujeres: Las convenciones que no se aplican

Pilar Codina Clua¹

Centro de Documentación y Estudios (CDE)

A 10 años de la ratificación por parte de Paraguay de la Convención Belém do Pará, todavía persisten discriminaciones tanto legales como “de facto” hacia las mujeres. Tal realidad fue constatada este año por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ante el análisis de los informes sobre el estado de cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), presentados tanto por el Estado como por la sociedad civil. El Estado paraguayo no puede ignorar las normas internacionales que ratifica, por lo tanto debe adecuar su legislación a las mismas y garantizar su cumplimiento.

¹ Pilar Codina Clua elaboró este informe en el Área Mujer del CDE durante la pasantía realizada entre abril a agosto de 2005, en el marco de la VIª edición del Magister en Género y Desarrollo - XIIIª edición del Programa de Formación en Cooperación Internacional “Mujeres y Desarrollo”, del Instituto de la Mujer y el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), de España.

MARCO LEGAL

El Capítulo III (artículos 46 a 48) de la Constitución Nacional de 1992 garantiza la igualdad entre las personas que habitan la República del Paraguay y prohíbe que sean discriminadas. Concretamente, el artículo 48 establece que los hombres y las mujeres tienen iguales derechos.

A partir de dicho marco constitucional, la República del Paraguay ha modificado y aprobado una serie de normas jurídicas para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. A tal fin, se modificó el Código Civil (Ley N° 1/92) donde, entre otros aspectos, se equiparan los derechos y obligaciones de ambos miembros del matrimonio o de la unión de hecho. Por otro lado, mediante la Ley N° 496/95 se modificó el Código Laboral (Ley N° 213/93), donde se incorporaron disposiciones como la figura del acoso sexual (art. 81, inc. w), pero se mantuvo la discriminación en el sector del trabajo doméstico (en su mayoría realizado por mujeres).

En cuanto al ámbito político, el Código Electoral, modificado por Ley N° 834/96, establece la cuota mínima de participación de las mujeres en 20% y sanciones a los partidos que no la cumplan; también prohíbe los contenidos discriminatorios por razón de sexo en la propaganda política y electoral. La adopción del nuevo Código Penal (Ley N° 1.660/97) y el Código Procesal Penal (N° 1.286/98) eliminó algunos artículos discriminatorios, pero aún persisten disposiciones que perjudican a las mujeres, y el aborto continúa siendo tipificado como delito. Con la finalidad de obtener una normativa penal que respete el principio de igualdad, la Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) Paraguay, por un lado, y la CODEHUPY, por el otro, presentaron dos propuestas de reforma del Código Penal y del Código Procesal Penal en febrero de 2005.

Un avance importante fue la adopción de la Ley N° 1.600/2000 contra la violencia doméstica, la cual establece normas de protección para toda persona que sufra lesiones, maltratos físicos, psíquicos o sexuales por parte de algún integrante del grupo familiar. Se trata de una ley civil, por lo tanto no dispone sanciones penales para las personas agresoras. Un año después se aprobó el Código de la Niñez y Adolescencia (Ley N° 1.680/01), con la finalidad de proteger tanto a niños como a niñas.

También el Estatuto Agrario (Ley N° 1.863/02) pretende fomentar la igualdad, adoptando medidas de acción positiva como la preferencia a favor de la mujer cabeza de familia para la adjudicación de la tierra

sometida a reforma agraria. Por otro lado, indica que el Estado promoverá el acceso de la mujer a la propiedad de la tierra.

A nivel internacional, la República del Paraguay ha ratificado una serie de instrumentos que favorecen la protección de las mujeres: la Cedaw, ratificada por Ley N° 1.215 del año 1986; el Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por la Ley N° 1 en 1989; la Convención de los Derechos del Niño, ratificada Ley N° 57 del año 1990; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de la Organización de Estados Americanos (OEA) – Belém do Pará del año 1994, ratificada por Ley N° 605 del año 1995; el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por Ley N° 1.663 del año 2001; el Protocolo Facultativo de la Cedaw, ratificado por Ley N° 1.683 del año 2001; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos el Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, ratificado por Ley N° 2.134 del año 2003; la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional – Convención de Palermo, ratificada por Ley N° 2.298 del año 2003; el Protocolo de Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que contempla la Convención de Palermo, ratificada por Ley N° 2.356 del año 2004.

Los Estados que han ratificado la Cedaw deben presentar periódicamente informes sobre su grado de cumplimiento. Durante nueve años el Estado paraguayo no entregó ningún informe al respecto. Por ese motivo, el 14 de enero de 2005 el Comité de la Cedaw consideró varios informes correspondientes a la República del Paraguay: los Informes Periódicos Tercero y Cuarto combinados (1996 – 2000) y el Quinto Informe Periódico (2000 – 2004). También tuvo en cuenta el Informe Sombra Estado de cumplimiento de la Cedaw presentado por Cladem Paraguay y la CMP.

En las Observaciones Finales el Comité indicó que no existe en la Constitución Nacional una definición de discriminación contra la mujer concordante con el artículo 1 de la Cedaw, y consecuentemente una prohibición de la misma. También expresó su preocupación porque la Convención no es aplicada directamente por los tribunales del Paraguay y por la falta de programas de capacitación jurídica dirigidos a mujeres. En cuanto al principio de igualdad, a pesar de ser reconocido por el texto constitucional, en los planes y programas se utiliza el concepto de “equidad” como equivalente al mismo. El Comité indicó que ambos términos no son sinónimos y que se debería utilizar el concepto de “igualdad”. Asimismo, instó al Estado a establecer un mecanismo de monitoreo, evaluación y corrección de la implementa-

ción e impacto de los planes y políticas referentes a la igualdad para las mujeres².

El Comité de la Cedaw expresó su preocupación por la discriminación hacia las mujeres en determinados ámbitos. Las observaciones más específicas se comentan en los apartados correspondientes del presente artículo.

MARCO INSTITUCIONAL

Con la finalidad de impulsar planes de acción para promover la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres se creó la Secretaría de la Mujer (Ley N° 34, del 18 de septiembre de 1992), como un organismo público dependiente de la Presidencia de la República. La Secretaría de la Mujer coordina la implementación del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2003 – 2007 (II PIO), aprobado por Decreto N° 1.958 del 8 de marzo de 2004. El objetivo del II PIO es promover la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas mediante instrumentos normativos eficientes y acciones dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación de género.

Para la implementación del II PIO se creó dentro de la Secretaría de la Mujer la Dirección de Descentralización, que tiene por objetivo coordinar planes sectoriales con los 17 gobiernos departamentales y, a través de éstos, con todos los municipios de Paraguay para incorporar la perspectiva de género en sus políticas y acciones. También impulsa la cooperación interinstitucional con los diversos ministerios y secretarías sectoriales.

Desde la Secretaría de la Mujer también se presentan e impulsan proyectos de ley, convenios u otro tipo de propuestas para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Este año se creó la Mesa de Seguimiento a la Cedaw con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, se firmó un convenio entre la Secretaría de la Mujer y la Defensoría del Pueblo para establecer una amplia cooperación institucional para adecuar mecanismos de denuncia y procedimientos a las necesidades de las mujeres en la protección de sus derechos, capacitar el abordaje de la violencia doméstica, la trata de personas o instrumentos jurídicos que garanticen los derechos de las mujeres, así como de redes entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. También se ha creado una Mesa de Trabajo con la Secretaría Nacional de la Niñez y Adoles-

² Comité de la Cedaw. *Observaciones finales: Paraguay. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la Cedaw). Cedaw/C/2005/1/CRP.3/Add.6/Rev.1. 28 de enero de 2005.*

cencia (SNNA) para la elaboración de una propuesta de ley sobre paternidad y maternidad responsables.

En julio de 2005 la Secretaría de la Mujer presentó la campaña “Iguales en todo 2005”, que además de sensibilizar y concienciar a la población, pretende favorecer la denuncia de casos de discriminación. Los principales ámbitos de la campaña son: salud integral, violencia y participación social y política.

A nivel del Poder Legislativo, en julio de 2000 la Cámara de Senadores creó la Comisión Asesora Permanente de Equidad, Género y Desarrollo Social, cuya función consiste en emitir dictámenes sobre proyectos de ley, resoluciones o declaraciones que contemplen criterios de equidad e igualdad de oportunidades para las mujeres, minorías y grupos vulnerables. También la Cámara de Diputados conformó en octubre de 2003 la Comisión de Asesoramiento Permanente de Equidad Social y de Género, con la finalidad de dictaminar sobre proyectos, asuntos y denuncias que se relacionen con la participación de los mismos en el ámbito de la vida política, cultural, familiar y laboral.

En cuanto al Poder Judicial, la Unidad de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia cuenta con un área temática de género, entre cuyas funciones está la de realizar o apoyar actividades de formación. Durante el periodo de vigencia del presente informe cabe resaltar el seminario taller “Justicia e igualdad: una aproximación a la perspectiva de género” (organizado con varias entidades de la sociedad civil en Asunción, noviembre de 2004), un panel debate sobre la ley contra la violencia doméstica (en Coronel Oviedo, mayo de 2005) y el “Seminario sobre incorporación de la perspectiva de derechos humanos y de género al fenómeno jurídico” (Asunción, julio de 2005).

DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La violencia de género se refiere en general a “aquella que se ejerce en contra de las mujeres o de los varones, cuyas causas y manifestaciones tienen que ver con la particular configuración que adquiere el ser mujer u hombre en una sociedad determinada, a partir de la construcción que cada cultura y sociedad hace de la diferencia entre los sexos”³. Precisamente, las mujeres, por el hecho de ser mujeres (ya sean adultas, ancianas, adolescentes o niñas) son las principales víctimas de la violencia de género. La Declaración de la ONU para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres indica que *“la violencia contra las mujeres incluye cualquier acto de violencia de género que resulta, o puede resultar, en el sufrimiento o daños físicos, sexuales o*

³ Soto, Clyde; González, Myrian; Elías, Margarita. “Encuesta Nacional de Violencia doméstica e intrafamiliar”. CDE, Asunción, 2003.

psicológicos de la mujer, e incluye las amenazas de tales actos, la coerción y privación arbitraria de libertad, sin importar si ocurren en la vida privada o pública”.

Uno de los máximos exponentes de la violencia de género es el asesinato de mujeres. En los últimos 10 años se han publicado en artículos de prensa 316 casos de feminicidio en Paraguay, de los cuales 170 fueron cometidos por las parejas y 22 por ex parejas⁴. En el año 2004 fueron 22 las mujeres asesinadas.

En los—últimos años, el secuestro se ha convertido en una práctica cada vez más habitual en Paraguay, produciéndose una feminización de estos casos. Según datos de la Secretaría de la Mujer, más del 50% de los secuestros producidos en los últimos 20 años tiene como víctimas a mujeres⁵.

Con la finalidad de disminuir la violencia de género, la Secretaría de la Mujer creó en 1994 el Plan Nacional para la Prevención y Sanción de la Violencia contra la Mujer. El Plan se estableció por tres años, prorrogables a cinco si fuera necesario, pero no hay una fecha exacta de vencimiento. El Plan tendría que ser, como mínimo, revisado, puesto que en más de 10 años se han producido cambios (empezando por la aprobación de la Ley N° 1.600 contra la violencia doméstica).

VIOLENCIA DOMÉSTICA

La violencia doméstica se ejerce en el ámbito del hogar y de la familia, y puede incluir agresiones físicas (violencia física), maltrato psicológico (violencia psicológica), contacto sexual no deseado (violencia sexual), así como control del dinero (violencia económica). El artículo 60 de la Constitución Nacional establece que *“el Estado promoverá políticas que tengan por objeto evitar la violencia en el ámbito familiar y otras causas que atenten contra su solidaridad”*.

En octubre del año 2000 se promulgó la Ley N° 1.600 contra la violencia doméstica. Aunque las denuncias por casos de malos tratos han aumentado en los últimos años, la aplicación de la ley no es totalmente efectiva. Entre los diversos obstáculos a los que tienen que hacer frente las mujeres maltratadas destacan los siguientes: las denunciantes son recibidas en espacios inadecuados, con poca privacidad; en muchas ocasiones el personal que se ocupa del caso no está capacitado ni sensibilizado para atender víctimas de violencia doméstica; a pesar de que el procedimiento de la Ley N° 1.600 es gratuito, en la

⁴ Datos publicados en la prensa y sistematizados en el Informativo Mujer del Centro de Documentación y Estudios (CDE), Asunción (N°s 71 al 173, enero 1995 a enero/febrero 2005).

⁵ Boletín electrónico de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República. Boletín especial – Cecilia Cubas. 18 de febrero de 2005.

práctica la víctima tiene que sufragar una serie de gastos (desplazamientos, fotocopias, etc.) que resultan elevados para personas de escasos recursos. Todos estos elementos comportan un desistimiento de la víctima a proseguir con la denuncia o, directamente, que ya no la interponga. En el campo, a las dificultades expuestas, se le añade el hecho de que las mujeres deben recorrer caminando muchos kilómetros para acudir a la comisaría, al centro de salud o al Juzgado de Paz más cercanos.

Desde los juzgados de paz se dictan las medidas cautelares para proteger a las víctimas, pero su horario de atención es insuficiente (de 7 a 13 horas, de lunes a viernes) para situaciones que requieren una intervención inmediata. También la sobrecarga de trabajo en los juzgados y las comisarías impiden una actuación diligente y el cumplimiento de los plazos legales. Mientras no se adoptan medidas, las mujeres no tienen dónde acudir puesto que no existen albergues habilitados a tales fines. En muchas ocasiones, es la propia víctima quien tiene que realizar las notificaciones a su agresor, poniendo así en peligro su integridad física y psíquica.

La Ley N° 1.600 es una norma civil que en general sólo establece medidas de protección urgentes para las personas víctimas de violencia, en tanto que el Código Penal regula la violencia familiar en el artículo 229 del siguiente modo: *“el que, en el ámbito familiar, habitualmente ejerciera violencia física sobre otro con quien conviva, será castigado con multa”*. A pesar de ser una norma penal no se castiga con privación de libertad. Tampoco incluye la violencia psicológica y ni la económica. El Código Penal exige la convivencia y la habitualidad para configurar el tipo penal, y deja a la libre apreciación del/la juez/a lo que se considera como violencia habitual. El Comité de la Cedaw indicó que tal penalización es inadecuada e instó al Estado paraguayo a reformar urgentemente el Código Penal para adecuarlo a la Convención⁶.

Este último año la Secretaría de la Mujer ha llevado a cabo diversas acciones para fomentar la disminución de la violencia contra las mujeres. Así, presentó el manual “Diseño de un modelo alternativo de prevención y atención integral a la violencia intrafamiliar” (noviembre de 2004), que consiste en una propuesta de intervención, prevención y tratamiento de la violencia intrafamiliar. También firmó con la Asociación de Magistrados de la Justicia de Paz del Paraguay el “Memorando de entendimiento y cooperación interinstitucional” (abril de 2005). Mediante dicho convenio, la Secretaría de la Mujer se pone a disposición para capacitar y sensibilizar sobre violencia intrafamiliar a las juezas y jueces de paz.

⁶Comité de la Cedaw, 2005, op. cit., párrafo 25.

Según datos del Sistema de Atención y Despacho de Llamadas de Emergencias (Sadle - 911), durante el año 2004 se registraron 3.774 llamadas de violencia doméstica; de enero al 24 de junio de 2005 el número ya llegaba a 2.543. Es importante resaltar que los datos no están desagregados por sexo, por lo que no se puede apreciar qué porcentaje de mujeres se ven afectadas por la violencia doméstica. El Sadle 911 opera desde mayo de 2004 en colaboración con la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, mediante el Programa de Atención Psicológica de Emergencia (APE - 911). Cuando existe un caso que requiere atención psicológica, la persona es derivada a un/a voluntario/a del programa (estudiante de psicología), que atiende la llamada.

En tanto, en el Servicio de Apoyo a la Mujer (Sedamur) se atendieron 1.214 casos, de los cuales 323 eran de violencia física, 563 correspondían a violencia psicológica, 99 a la sexual y 229 a la de tipo económica. De enero a junio de 2005 el número de usuarias del servicio ya alcanzaba 909.

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva (Endssr) 2004, el 14% de las encuestadas había recibido castigo físico antes de cumplir los 15 años, y casi la mitad (48,7%) informó que el autor de la agresión fue su padre. En cuanto a la violencia ocasionada por alguna pareja o ex pareja, el 33,4% indicó haber recibido violencia verbal, el 19,3% violencia física y el 7,6% violencia sexual. El responsable principal de la violencia es el esposo o compañero, en segundo lugar la ex pareja y en menor proporción el novio. De las entrevistadas que habían sufrido violencia, en el 56,8% de ellas no acudió a nadie, solamente el 5,7% denunció a la comisaría y el 2,5% al Juzgado de Paz⁷, lo que muestra que la gran mayoría de los casos de violencia doméstica goza de total impunidad.

El número de los juicios civiles por violencia doméstica en la capital del país es de 375. Los casos penales de violencia familiar que recibieron entrada en la jurisdicción de Asunción durante 2004 fueron 101, y de enero al 12 de agosto de 2005 se iniciaron 29 nuevos expedientes. Es difícil identificar en qué casos la violencia fue ejercida por los varones contra sus parejas, puesto que los datos no están sistematizados y se debe consultar expediente por expediente⁸.

⁷ Centro Paraguayo de Estudios de Población (Cepep) "Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva (Endssr) 2004". Cepep. Asunción, 2005, págs. 291-298.

⁸ Fuente: secciones de estadísticas del —fuero Civil y del fuero Penal de la Corte Suprema de Justicia.

VIOLENCIA SEXUAL

El Capítulo V del Código Penal regula los “hechos punibles contra la autonomía sexual” (artículos 128 a 133). Dentro del Capítulo VI “Hechos punibles contra menores”, el artículo 135 establece el abuso sexual en niños y niñas, el artículo 136 determina el abuso sexual en personas bajo tutela, el artículo 137 tipifica el delito de estupro y el artículo 138 los actos homosexuales con niños y niñas.

Según la Endssr 2004, “el 6,5% de todas las mujeres de 15 a 44 años de edad reportó que en el transcurso de su vida fue violada (con penetración) alguna vez”⁹, lo que significa, en términos representativos de la población paraguaya en 2004, que aproximadamente 78.000 mujeres de esa franja etaria fueron víctimas de violación alguna vez en su vida. Este estudio revela también que el 20,1% de las mujeres encuestadas fueron violadas antes de los 15 años de edad y el 59,1% antes de los 20¹⁰.

Otros datos existentes muestran también que la mayoría de los delitos relativos a la autonomía sexual se cometen contra mujeres jóvenes. De los 319 casos de coacción sexual registrados por la Policía Nacional en 2004, 224 correspondían a mujeres menores de 30 años, y 55 a mujeres mayores de 30 años. Hasta el mes de mayo de 2005 las víctimas de sexo femenino fueron 128 (119 casos correspondían a menores de 30 años y nueve a mujeres mayores de esa edad) de un total de 146 personas.

Otro dato relevante es que la mayoría de las agresiones contra la autonomía sexual son perpetradas por personas del ámbito cercano de la víctima. En 247 casos del total de denuncias recibidas en la Policía durante 2004, la persona que cometió el delito era conocida por la víctima, y en 2005 ya se registraron 103 casos hasta el mes de mayo¹¹. En la Endssr 2004, el 67,3% de las mujeres que dijeron haber sido violadas alguna vez en su vida declaró que el autor fue su pareja o ex pareja; el 13%, un amigo o vecino; el 5,4%, un familiar. Sólo en el 11,5% de los casos el violador fue un desconocido¹². Esta realidad pone en evidencia que la circunstancia atenuante basada en las relaciones de la víctima con el autor podría ser aplicada en un gran número de casos de coacción sexual¹³.

La CMP y Cladem Paraguay indican que *“se supone que se silencia el 90% de los delitos de coacción sexual –uno de los más graves contra*

⁹ Cepep, 2005, op. cit., pág. 299.

¹⁰ Ibídem, pág. 300.

¹¹ Fuente: Departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional.

¹² Cepep, op. cit., pág. 300. —

¹³ En los supuestos de abuso sexual a personas indefensas también se prevé la reducción de la pena en función de las relaciones de la víctima con el autor. Ver artículo 130 del Código Penal.

*la persona– por los inconvenientes legales de prueba del delito y por la tímida respuesta judicial, que se traduce en la penalización efectiva de 1% de lo denunciado y con penas mínimas*¹⁴. Por lo tanto, existe una amplia impunidad en los delitos de coacción sexual, y la aplicación de las circunstancias atenuantes la refuerzan aún más.

En el caso de estupro, el artículo 137 del Código Penal establece que *“el hombre que persuadiera a una mujer de 14 a 16 años a realizar el coito extramarital, será castigado con pena de multa”*. La CMP y Cladem Paraguay propusieron su derogación por ser discriminatorio referirse sólo a las mujeres para configurar el tipo penal y por castigar exclusivamente la situación extramarital, no el hecho en sí. En estos supuestos no se requiere una tipificación adicional, pues se incluyen dentro del delito de abuso sexual de personas bajo tutela.

El Comité de la Cedaw en sus Observaciones Finales señala que el abuso sexual está penalizado inadecuadamente en Paraguay. Concretamente, urge al Estado a revisar los artículos 136 (abuso sexual en personas bajo tutela) y 137 (estupro) del Código Penal, para adecuarlos a la Cedaw y a la Recomendación General N° 19 para combatir todas las formas de discriminación contra las mujeres y asegurar que los victimarios serán enjuiciados y castigados. También indica que el Estado debe ofrecer protección efectiva a las mujeres contra represalias¹⁵.

El artículo 138 del Código Penal tipifica los actos homosexuales con niños, niñas y adolescentes. Esta disposición contiene una clara discriminación por razón de orientación sexual, siendo contraria a la Constitución Nacional y a varias normas de derechos humanos de carácter internacional ratificadas por Paraguay.

No existe en el Código Penal (vigente desde 1998) ningún artículo relativo a la pornografía infantil, aunque en el año 2003 Paraguay ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía, lo que podría ayudar a impulsar modificaciones legales al respecto

En cuanto a la atención a mujeres y niñas víctimas de violencia, falta capacitación y sensibilización entre el personal de los centros de sa-

¹⁴ *Propuestas para la Comisión Nacional de Reforma del Sistema Penal y Penitenciario. CMP y Cladem Paraguay. Asunción, febrero de 2005. Según la Endssr 2004, el 20,8% de las mujeres encuestadas víctimas de violación acudió a pedir ayuda a una amiga o vecina, el 15,6% a la Policía o al jefe de la comunidad, el 3,5% a alguna organización de mujeres, el 2,9% a la iglesia, el 8,8% a profesionales médicos, de la justicia y otros no parientes (Cepep, op. cit., pág. 301). En la zona de Asunción sólo tuvieron entrada 104 de coacción sexual en 2004 y 46 hasta mediados de 2005 (fuente: sección de Estadística del fuero Penal de la Corte Suprema de Justicia).*

¹⁵ *Comité de la Cedaw, 2005, op. cit., párrafo 25.*

lud, la policía y los juzgados. También es necesario un espacio de privacidad adecuado para que la víctima pueda relatar los hechos. Por otro lado, existe un continuo proceso de revictimización, y es frecuente que en los juicios se realicen preguntas improcedentes para poner en cuestión la “honra” de la víctima.

Para mejorar la atención a las personas víctimas de este tipo de delitos, el legislador Carlos Filizzola, del Partido País Solidario, presentó la propuesta de ley para la creación del Programa Nacional de Prevención y asistencia a las víctimas de hechos punibles contra la autonomía sexual y contra niños, niñas y adolescentes. El texto legal fue aprobado en la Cámara de Senadores en diciembre de 2004, pero posteriormente fue rechazado en la de Diputados a causa de la presión de ciertos grupos que aseguraban que la ley legalizaba el aborto y el matrimonio entre personas de un mismo sexo (aunque el proyecto de ley no aludía a ninguno de estos dos temas). Entre otros objetivos, el proyecto pretendía garantizar el respeto, la protección y el ejercicio de los derechos humanos a las víctimas de hechos punibles contra la autonomía sexual y contra niños, niñas y adolescentes, así como la implementación de servicios integrales, específicos, expeditivos, accesibles y gratuitos para la asistencia médica, psicológica, social y jurídica a las víctimas.

TRÁFICO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MUJERES, ADOLESCENTES, NIÑAS Y NIÑOS

Según la Organización Internacional de Migraciones (OIM), Paraguay es considerado uno de los principales países de origen de mujeres traficadas, existiendo una estrecha vinculación entre la explotación sexual y las mafias de tráfico y de personas. Así, es una práctica frecuente ofrecer trabajo a mujeres paraguayas en el extranjero (generalmente Europa, Asia, Brasil o Argentina), y una vez que llegan al mismo se les retiene el pasaporte y toda documentación y son obligadas a ejercer la prostitución. Por otro lado, se estima que en la zona de la Triple Frontera hay cerca de 3.500 niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual. Además, en internet la zona se ofrece como destino de turismo sexual.

La OIT inició en el año 2001 el Programa de Prevención y Eliminación de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en la Triple Frontera (Argentina, Brasil, Paraguay). Se crearon comités locales de instituciones públicas y privadas para la prevención y eliminación de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (el de Paraguay se ubica en Ciudad del Este). También se instaló un Centro de Atención Integral de Víctimas de Explotación Sexual Comercial (Ceapra).

Entre las acciones que se han realizado este año para evitar el tráfico de personas y la explotación sexual destacan una serie de acuerdos y convenios. En diciembre de 2004, propietarios/as de hoteles y moteles de la zona de la Triple Frontera firmaron un acuerdo por el que se comprometieron a luchar contra la explotación sexual y comercial infantil. En enero de 2005 se presentó el plan de operaciones de cooperación técnica y financiera "Apoyo a la lucha contra el tráfico de personas", cuya financiación proviene del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El plan tiene por objetivo ampliar el debate nacional sobre el tráfico de personas, en especial mujeres, niñas y niños, insertándolo en la agenda de la protección de los derechos humanos, seguridad y justicia¹⁶. Por otro lado, la Secretaría de la Mujer presentó la campaña "Sensibilización sobre la Trata de Personas y Explotación Sexual 2005" (agosto 2005) que, además de sensibilizar a la población sobre este problema, informará sobre dónde denunciar ante la sospecha de la aparición de reclutadores/as. En junio de 2005 se inauguró el Centro de Referencias en el tema Trata de Personas con la finalidad de recibir denuncias y dar atención psicológica y legal a las víctimas. Entre sus atribuciones está la de realizar campañas de información y capacitaciones a agentes institucionales, así como la de coordinar la red nacional de instituciones gubernamentales y no gubernamentales de atención a víctimas de trata de personas. También atiende a mujeres víctimas de violencia doméstica.

En marzo de 2005 se publicó el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía, basado en la visita que hizo a Paraguay el relator Juan Miguel Petit entre el 23 de febrero y 5 de marzo de 2004.

Según el informe del relator especial, aproximadamente dos de cada tres trabajadoras sexuales son niñas o adolescentes. La mayoría de adolescentes víctimas de explotación sexual se ubica entre los 16 y 18 años, pero son explotadas desde los 12 y 13 años (algunas desde edades más tempranas). En Asunción, la mayoría de las víctimas provienen del interior del país, con historias de violación, abuso sexual y maltrato físico en el entorno familiar. También indica que existe la sensación de impunidad para los crímenes de explotación sexual por las alegaciones de corrupción, inacción o complicidad de la policía en este tipo de delitos. Un factor más que propicia la explotación infantil es la ausencia de certificado de nacimiento de entre el 15% y el 20% de las niñas y niños de Paraguay (de 250.000 a 300.000), pues legalmente no existen. Por otro lado, muchas de las víctimas de explotación sexual han sido "criaditas" (se estima que existen 40.000 criaditas

¹⁶Diario Abc Color, 20 de enero de 2005.

entre 6 y 12 años de edad). Por lo general, provienen de zonas del interior y residen en casas de familias de clase media y alta. En teoría, realizan trabajo doméstico con la finalidad de ir a la escuela. Pero en muchas ocasiones, no reciben educación y sufren malos tratos, así como abusos sexuales. Para escapar de tal situación, muchas acaban cayendo en manos de proxenetas que las explotan sexualmente¹⁷.

El Informe Sombra sobre el estado de cumplimiento de la Cedaw indica que el Código Penal establece sanciones contra la trata de personas (artículo 129), el proxenetismo (artículo 139) y la rufianería (artículo 140), pero no se establece sanción penal para quien participa como cliente en situaciones de explotación sexual comercial infantil y adolescente. A pesar de existir sanciones para las personas que comercian sexualmente con niñas y adolescentes, *“la única medida adoptada por el Estado paraguayo es la realización de ‘redadas’ policiales en las que la víctima de explotación sexual es tomada presa y tratada como delincuente, mientras que los delincuentes reales quedan en libertad e impunes”*¹⁸.

Por su parte, el Comité de la Cedaw en sus observaciones finales indicó que la legislación interna no ha sido adecuada a los estándares de los instrumentos internacionales para combatir el tráfico de personas y la explotación sexual (Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y su Protocolo Adicional para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, así como el Protocolo Facultativo de la Convención de Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía), y que el Código de la Niñez y la Adolescencia carece de disposiciones sobre explotación sexual y tráfico de niñas y niños. También destacó la falta de un plan integral para prevenir y eliminar el tráfico de mujeres y para proteger a las víctimas, así como de un sistema de recolección de información sobre el tema.

El Comité de la Cedaw recomendó al Estado que atendiera las causas del tráfico introduciendo medidas para mejorar la situación económica de las mujeres y eliminar su vulnerabilidad frente a los traficantes, a implementar iniciativas en materia de educación, medidas de apoyo social, y medidas de rehabilitación y reintegración de las mujeres y niñas que hayan sido víctimas del tráfico.

¹⁷ Informe del relator especial de Naciones Unidas sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía. Misión al Paraguay de Juan Miguel Petit. Asunción, marzo de 2005.

¹⁸ Cladem y CMP. “Informe Sombra Estado de cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer por parte del Estado paraguayo”. Cladem Paraguay y CMP. Asunción, 2004 (mimeo).

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS CONFLICTOS POR LA TIERRA

En los últimos años ha cobrado más fuerza la violencia en los desalojos de asentamientos en las zonas rurales. Las amenazas de muerte a organizaciones campesinas que luchan por el acceso a la tierra, el derecho a la salud y por el respeto de otros derechos humanos son constantes. A principios del mes de agosto de 2005, un dirigente campesino y dos religiosas católicas recibieron amenazas de muerte por apoyar al Frente Distrital de General Resquín (organización de campesinos/as), en el departamento de San Pedro. A pesar de estos hechos, el Estado paraguayo no ofrece protección ni garantiza el derecho a la vida y a la libertad de los/las líderes campesinos/as y de las personas que les ayudan.

El 24 de junio de 2005 se produjo el desalojo de las familias del asentamiento Tekojoja (distrito de Vaquería, departamento de Caaguazú). Sus viviendas fueron quemadas y destruidas ante la mirada atenta de la Policía Nacional, quedando 350 personas sin siquiera sus pertenencias personales. Atentaron con armas de fuego contra campesinos y campesinas (algunas de las mujeres estaban embarazadas), produciendo la muerte de dos hombres. Niños y niñas fueron detenidos/as con sus padres y madres. A causa de los golpes recibidos, una mujer embarazada de cuatro meses perdió a su bebé. Otra campesina, a los dos días de ser liberada de su detención, tuvo a su hijo bajo una carpa sin las medidas higiénicas adecuadas; tanto ella como el niño estaban en delicado estado de salud sin que el Estado paraguayo les prestara auxilio alguno. Dos mujeres en avanzado estado de gestación sufrieron graves complicaciones en el embarazo como consecuencia de los fuertes golpes físicos recibidos, maltrato psicológico, apresamiento y traslado de forma inhumana durante los 120 km. que distan de Vaquería a Coronel Oviedo (lugar donde fueron retenidas), resultando su embarazo de alto riesgo¹⁹. En una represión en el departamento de San Pedro a finales de 2004, las mujeres fueron obligadas a ponerse de cuatro patas y mientras las Policía les decía "arrástrense como si fueran perras", las golpearon.

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

El artículo 117 de la Constitución Nacional establece la promoción del acceso de la mujer a las funciones públicas. En cuanto al Código Electoral, prohíbe la propaganda que pueda generar discriminación por razón de sexo (artículos 287 y 292), indica que los padrones serán

¹⁹ Comunicado de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri), 14 de julio de 2005.

formados separadamente para varones y mujeres (artículo 120) y que el estatuto del partido político contendrá *“mecanismos adecuados para la promoción de la mujer en los cargos electivos en un porcentaje no inferior a un 20% y el nombramiento de una proporción significativa de ellas en cargos públicos de decisión. (...) la postulación interna de las candidatas deberá darse a razón de una candidata mujer por cada cinco lugares en las listas”*, aunque hay libertad para fijar la precedencia (artículo 32, inciso “r”).

Según el Informe Sombra Estado de Cumplimiento de la Cedaw, la cuota es insuficiente y representa un obstáculo para un aumento sostenido del acceso de mujeres a cargos electivos de decisión debido a una serie de elementos: *“a) al aplicarse sólo en las candidaturas internas partidarias, las listas que finalmente los partidos presentan a las elecciones nacionales o municipales ni siquiera llegan a tener un 20% de mujeres; b) debido al sistema de alternancia establecido, las pocas mujeres candidatas generalmente quedan en lugares con menor expectativa de elegibilidad; c) su efecto es prácticamente nulo cuando los escaños o lugares en juego son pocos; d) tras ocho años de vigencia de la norma, el escaso porcentaje obligatorio para los partidos políticos es manejado por estas instituciones como un techo para las candidaturas femeninas. La situación se agudiza en los partidos con mejores posibilidades electorales, donde frecuentemente manejan los quintos puestos de las listas internas como ‘lugares de mujer’, significando de esa manera que las mujeres no pueden aspirar más que a ubicarse en estos sitios; e) la mayoría de partidos incluyen cuotas en sus estatutos, y algunos incluso han mejorado la disposición en concordancia con el sentido de este tipo de acciones positivas. Por ello, esta medida de acción afirmativa ya no representa un plus para avanzar al respecto”*²⁰.

En base al Código Laboral, las mujeres que ocupan cargos electivos no tienen los mismos beneficios por razón de maternidad que el resto de mujeres que reciben trabajo remunerado. Esta medida no fomenta precisamente la participación política de las mujeres. Para eliminar dicha discriminación, el 3 de agosto de 2005 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para que las mujeres que ocupan cargos electivos puedan gozar de tal derecho (el proyecto fue remitido luego a la Cámara de Senadores).

En cuanto a datos estadísticos, en el Congreso Nacional la participación de la mujer es mínima (10% de diputadas y 2% de senadoras). El número de concejales departamentales es de 27, y de 17 gobernaciones, existe una sola mujer gobernadora. El 4,9% de las intendencias y el 15% de las concejalías municipales está ocupado por mujeres. En el

²⁰ Cladem y CMP, 2004, op. cit., artículo 7.

año 2004 se nombró por primera vez a una mujer como ministra de la Corte Suprema de Justicia. No hay mujeres en el Consejo de la Magistratura ni en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados²¹.

Entre los cargos presupuestados del Poder Judicial hay 189 mujeres frente a 342 hombres. La mayoría de las mujeres se concentran en los juzgados de paz, aunque la cantidad continúa siendo menor que el de varones (126 hombres y 106 mujeres). El número de mujeres es menor en los altos cargos de la magistratura; por ejemplo, entre los doce miembros que componen el Tribunal de Apelación en lo Criminal sólo hay una mujer, y en el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial existen tres puestos ocupados por mujeres de un total de 15. En cambio, en el Tribunal de Cuentas no hay ni una sola mujer²².

Ante tal situación, el Comité de la Cedaw expresó su preocupación por la baja participación de mujeres en órganos de decisión y en las esferas política y pública²³.

En cuanto a las acciones realizadas este año con la finalidad de fomentar la participación política de las mujeres, las organizaciones civiles Tiempo Nuevo y Mujeres en Red firmaron con el Congreso Nacional un convenio para la ejecución del proyecto "Parlamento de Mujeres" (febrero 2005), el cual busca generar un espacio alternativo de visibilidad y empoderamiento de lideresas de diferentes partidos políticos. Asimismo, el Centro de Liderazgo Femenino (a iniciativa de la Secretaría de la Mujer, con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia Electoral), realizó el seminario "Identidad de género en la participación política" (agosto de 2005). El objetivo del Centro para este año es capacitar a 1.000 mujeres, pero se pretende beneficiar con becas a 100 mil mujeres hasta 2008. El Centro es una de las principales acciones del II Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2003 – 2007.

DERECHO A LA EDUCACIÓN

El Capítulo VII de la Constitución Nacional (artículos 73 a 85) se refiere al derecho a una educación integrante y permanente que tiene toda persona. Asimismo, menciona la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio. El artículo 10 de la Ley General de Educación establece el principio de igualdad con relación a las condiciones de acceso y permanencia en los centros educativos, así como la efectiva igualdad entre sexos y el rechazo a todo tipo de discriminación. Por otro lado, el plan estratégico de la reforma educativa "Para-

²¹ Datos obtenidos de la página web de la Secretaría de la Mujer: <http://mujer.gov.py>

²² Unidad de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia. Fecha de elaboración: 16 de marzo de 2005, con datos de noviembre de 2004.

²³ Comité de la Cedaw, op. cit., párrafo 18.

guay 2020” incluyó la proposición de una serie de acciones para la introducción de la perspectiva de género en la educación formal.

En 1995 la Secretaría de la Mujer firmó un convenio con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) con la finalidad de implementar el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y Resultados para las Mujeres en la Educación (Priome), cuyo objetivo principal es promover la inserción de la perspectiva de género en la educación y en el proceso de reforma educativa. Para ello, en el interior del MEC se creó una Unidad Técnica Operativa de coordinación de acciones.

En marzo de 2005, el Unfpa presentó la campaña educativa “Crece-
mos contigo 2004-2005” que consiste en una serie de mensajes sobre trato igualitario en la escuela, importancia del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, prevención de la violencia en el ámbito escolar, promoción de la cultura de equidad, que se insertan en el formato de cómics en tapas y contraportadas de cuadernos²⁴.

En cuanto a las tasas de analfabetismo en Paraguay, la de las mujeres (9,8%) es mucho mayor que la de los hombres (6,9%), acentuándose más la brecha en zonas rurales (mujeres: 15,4%; hombres: 10,7%) y, en consecuencia, muestra que son las mujeres campesinas e indígenas las que tienen niveles menores de educación formal. En el ámbito rural, es común que cuando la escuela queda lejos, a las niñas que llegan a la adolescencia las obligan a abandonar la escuela, y además la deserción escolar por problemas familiares es más alta en las mujeres (12,4%) que en los varones (3,7%)²⁵. En este sentido, el Comité de la Cedaw indicó que las altas tasas de analfabetismo y deserción escolar son insuficientemente atendidas por el Estado paraguayo²⁶.

Un reciente análisis de Unicef puso de relieve una serie de prácticas sexistas del sistema educativo paraguayo. Entre las conclusiones a las que llegó el estudio resalta el hecho de que las/os docentes continúan realizando comentarios discriminatorios hacia las niñas o utilizan diminutivos para dirigirse a ellas. Predomina el lenguaje androcentrista, invisibilizando de este modo a niñas y mujeres. Así, por ejemplo, se utiliza el masculino para designar colectivos donde hay personas de ambos sexos. Por otra parte, las conductas violentas en los niños son más aceptadas que en las niñas, puesto que forma parte de la “naturaleza” masculina. En cuanto a las tareas en el aula, el personal docente suele distribuirlas según el sexo del/la alumno/a; así las niñas barren y lavan la escuela, mientras que los varones mueven muebles o acarrean la basura (además, ellos son dispensados en el tercer ciclo, cuando llegan a la adolescencia). En cuanto a los con-

²⁴ *Diario ABC Color*, 4 de marzo de 2005.

²⁵ Datos obtenidos de la página web de la Secretaría de la Mujer: <http://www.mujer.gov.py>

²⁶ Comité de la Cedaw, op. cit., párrafo 18.

tenidos de los planes del aula, generalmente no existe planificación en el análisis de la equidad de género. Se realiza una clara discriminación contra las niñas en las clases de educación física, donde se da preferencia a los varones; en cambio, a ellas no se las deja participar en determinadas actividades como, por ejemplo, el fútbol. El estudio de las asignaturas de trabajo y tecnología revela que el profesorado reafirma los roles tradicionales de género, guiando las preferencias del alumnado en función de su sexo²⁷.

A nivel de educación escolar superior y universitaria, el Estado no ha incorporado la perspectiva de género. A pesar de que la educación es gratuita, hay un elevado número de niñas y niños que abandonan el sistema educativo por razones económicas. Las mujeres continúan accediendo a carreras vinculadas con el rol tradicional femenino, como son ciencias de la educación, salud, ciencias sociales y humanidades. Aún se siguen expulsando a las adolescentes embarazadas de la escuela. Existen casos de acoso sexual de las niñas y adolescentes por parte de los profesores. Ante tales supuestos el MEC ha dispuesto medidas urgentes como la suspensión y retención de los salarios o la apertura de procedimientos administrativos²⁸.

Desde la apertura del Colegio Nacional de la Capital (CNC) a las mujeres, las alumnas son víctimas de varios actos discriminatorios²⁹. Durante el acto de colación de la primera promoción mixta los alumnos insultaron a sus compañeras y detonaron petardos en la sala donde se celebraba la ceremonia. Además, el centro de estudiantes había declarado persona no grata a la ministra Blanca Ovelar, que había dispuesto a principios de año el cambio en el centro educativo. En su segundo ciclo lectivo como institución educativa mixta, se matricularon 350 mujeres (100 más que las que hubo en 2004). Los alumnos varones no permitieron la participación de las mujeres en las elecciones del centro de estudiantes, tal y como sucedió el curso pasado. Ante la protesta de dos alumnas, éstos las agredieron verbalmente y les derramaron agua. El hecho fue denunciado ante consejo directivo del CNC, pero no se suspendieron las elecciones, aunque afirmaron que los resultados serían no válidos. Ante estos sucesos, el defensor adjunto del Pueblo remitió una nota a la ministra de Educación denunciando la discriminación contra las estudiantes del CNC. Las alumnas también se quejan de que la institución no ofrece condiciones para la presencia femenina, como baños adecuados o separados por sexos.

²⁷ Unicef. "Prácticas sexistas en el aula". Unicef. Asunción, 2004.

²⁸ Cladem y CMP, 2004, op. cit., artículo 10.

²⁹ Similar situación sucede en el que fuera Colegio Nacional de Niñas (CNN, hoy también mixto), de larga e importante tradición como el CNC. A estudiantes, padres, madres e incluso cuerpo docente del CNN tampoco les agradó que la institución se convirtiera en un colegio mixto, y también han afrontado crisis y problemas por esta razón.

Algunas alumnas prefieren una sección propia. A esta finalidad se creó un centro de estudiantes paralelo denominado “Serafina Dávalos”³⁰.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

El artículo 61 de la Constitución Nacional reconoce *“el derecho de las personas a decidir libre y responsablemente el número y la frecuencia del nacimiento de sus hijos, así como a recibir, en coordinación con los organismos pertinentes, educación, orientación científica y servicios adecuados en la materia. Se establecerán planes especiales de salud reproductiva y salud materno-infantil para la población de escasos recursos”*. Por otro lado, el artículo 55 del texto constitucional indica que el Estado protegerá la maternidad y paternidad responsables y fomentará la creación de las instituciones que fueran necesarias para ello.

En el año 1994 se creó el Consejo Nacional de Salud Reproductiva con la finalidad de analizar la situación y tomar decisiones que faciliten el desarrollo. Está formado por instituciones y agencias involucradas con el ámbito de la salud reproductiva del país. El Consejo aprobó el Plan Nacional de Salud Reproductiva 1997-2001 y posteriormente estableció el Plan Nacional de Salud Reproductiva 2003-2008. Éste último fue elaborado mediante un proceso participativo con otras instituciones y la sociedad civil. El Plan pretende promover la responsabilidad en el comportamiento sexual y reproductivo, en un marco donde las personas sean tratadas dignamente, sin discriminación de edad, etnicidad, o nivel socioeconómico y con respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las personas, la equidad social y de género. El Plan establece como objetivo estratégico mejorar la salud sexual y reproductiva de la población del Paraguay a través de políticas, programas y proyectos integrados y sostenibles que aseguren la atención integral al individuo y a la comunidad con enfoque de derechos, calidad, género y equidad. El objetivo será evaluado mediante unos indicadores y unos resultados intermedios a alcanzar a lo largo de los cinco años de su implementación.

También existen Planes Departamentales de Salud Sexual y Reproductiva, en base a lo establecido en el plan nacional. Por otro lado, en el año 2000 se puso en funcionamiento la Comisión Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Salud y de la Mortalidad Materna.

El aborto provocado está penalizado en Paraguay, razón que impide contar con estadísticas que indiquen con precisión la cantidad de abortos que se realizan y también las muertes por esta causa. No obstante, los datos oficiales existentes indican que el aborto está entre las prin-

³⁰ Diario Última Hora, 23 de marzo de 2005.

cipales causas de mortalidad materna en el país³¹, debido justamente al alto número de abortos clandestinos que se realizan en condiciones insalubres y con métodos poco seguros para la vida de la mujer. El Estado estima que el aborto clandestino causa unas 400 muertes al año³², aunque no hay un registro específico a tal efecto. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social estima que se practican un promedio de 27 abortos clandestinos por día, lo que significa aproximadamente unos 10 mil al año. En 2004, 29 mujeres fallecieron por complicaciones del aborto. La mayoría (75%) murió en los hospitales por infección generalizada, y el resto por hemorragia. Muchas muertes por aborto quedan camufladas en certificados por defunción. El número de partos institucionales es apenas del 74%³³.

En cuanto a los índices de mortalidad materna, de enero a abril de 2005 hubo un total de 24 muertes registradas en el país (pero el dato no está desagregado por causa). En el año 2004 fueron 35 las mujeres muertas por aborto (23%), por toxemia 30 (19%), por hemorragia 36 (23%), por sepsis 21 (14%) y el resto, 32, por otras complicaciones (21%)³⁴.

Los artículos 349 al 353 del Código Penal tipifican el delito de aborto haciendo clara referencia al “honor de la mujer”. De este modo, si el aborto se hizo con la finalidad de salvar el “honor”, se aplica una reducción de la pena, lo cual demuestra que el bien jurídico protegido es el “honor de la familia”. A pesar de ser una norma del año 1914, continúa siendo aplicada actualmente. Desde 1993 se han registrado 35 procesos por aborto en la jurisdicción de Asunción (tres iniciados en el año 2004)³⁵. La CMP y Cladem Paraguay propusieron la modificación de esta parte del Código Penal, puesto que Paraguay ha adquirido compromisos a nivel internacional (Plataforma de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo - 1994, la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer de Beijing - 1995, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio), que lo obligan a considerar la forma de disminuir la mortalidad materna, incluso mediante la revisión de la penalización del aborto.

Debido a la penalización se realizan multitud de abortos clandestinos, que por ser perseguibles criminalmente no cuentan con ningún tipo de control del Estado en cuanto a los requisitos básicos (instrumental

³¹ Quizá incluso el aborto sea —la primera causa de mortalidad materna en Paraguay, dado que al ser realizado de manera oculta, clandestina, y que existen numerosas complicaciones derivadas de este procedimiento (sepsis, hemorragias, etc.), muchas muertes son registradas bajo otras causas médicas.

³² Quintos informes periódicos de los Estados partes. Paraguay. Cedaw/C/PAR/5. 25 de mayo de 2004. Artículo 12.

³³ Diario Última Hora, 30 de enero de 2005.

³⁴ Dirección General de Programas de Salud. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

³⁵ Fuente: sección de Estadística del fuero Penal de la Corte Suprema de Justicia.

adecuado, profesionales capacitados), que garanticen su realización en condiciones higiénicas saludables.

Además, de ser penalizadas, las mujeres que acuden a hospitales o centros de salud por complicaciones a causa de un aborto son maltratadas y a veces ni siquiera se las atiende. Existe una Comisión Nacional de Vigilancia de la Salud y Mortalidad Materna que debería registrar y estudiar los casos de muerte, pero no cuenta con sistemas de seguimiento y evaluación permanentes³⁶. Además de la deficiente atención médica en caso de complicaciones como consecuencia de un aborto clandestino, en los casos en que la mujer decide proseguir con el embarazo tampoco hay garantías de tener un parto seguro. En Paraguay fallecen al año unas 240 mujeres por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, siendo el país de Latinoamérica con más mortalidad materno-infantil. A pesar de que en los centros de salud se deberían entregar los denominados “kits de parto” de forma gratuita, la realidad es otra. Éstos deben contener 12 componentes, pero en muchas ocasiones aparecen sólo cinco. El resto se pierde por el camino. La situación es más grave en las zonas rurales, donde en algunos centros de salud llegan tan sólo seis kits por mes, cuando el promedio de partos es de 40 (sin contar los realizados por parteras empíricas).

En algunas zonas del Paraguay se debe transitar de 40 a 70 km. para llegar al puesto de salud más cercano, y cuando llegan se encuentran con que la atención que reciben por parte del personal funcionario es mala y en ocasiones ni tan solo se les visita. Hay centros de salud donde, a pesar de que su horario de atención es hasta las 14 horas, a partir del mediodía ya no dejan entrar a nuevos pacientes, aunque sea una urgencia. Incluso se han dado casos de mujeres que iban de parto y no fueron atendidas, resultando la muerte de ellas o del/a bebé. No es de extrañar pues que el porcentaje de partos institucionales sea tan sólo del 60% en la región norte del país (mientras que en el Gran Asunción es del 92%)³⁷.

Pero no sólo en el parto existen deficiencias en la atención, también lo hay en la detección de enfermedades que puedan afectar al niño/a. Así, por ejemplo, la sífilis afecta a cinco de cada 100 embarazadas, lo que representa casi ocho mil casos por año. En Paraguay, apenas el 10% de las personas diagnosticadas siguen el tratamiento que evita que la enfermedad se transmita al feto. La detección y tratamiento le costaría unos 10.000 guaraníes³⁸ por caso al Estado, pero no se ofrece gratuitamente en todos los hospitales. Uno de los problemas radica en que el personal de salud no está suficientemente capacitado, por lo que se pierden oportunidades de atención. Además, el trata-

³⁶ *Cladem y CM, 2004, op. cit., artículo 12.*

³⁷ *Cepep, 2005, op. cit., págs. 32-35.*

³⁸ *Menos de dos dólares americanos.*

miento exige medicar también a la pareja sexual, lo que es difícil porque los hombres son reacios a la atención médica³⁹. Los controles prenatales son insuficientes; se estima que una de cada 10 mujeres de 15 a 19 años de edad nunca acudió a ninguna revisión de este tipo.

Otro problema de salud que afecta exclusivamente a las mujeres es el cáncer de cuello uterino. Para detectarlo y prevenirlo es imprescindible un estudio anual de papanicolau. Al Estado le cuesta 13.000 guaraníes por mujer garantizar esta prueba. Hasta ahora el Ministerio de Salud Pública no ha asumido el programa de detección de cáncer de cuello uterino como una prioridad, a pesar de que actualmente es la segunda causa de muerte en mujeres. El estudio se realiza a unas 100 mil mujeres al año, pero debería llegar a 980 mil. Otros problemas son la falta de confidencialidad en los servicios, que hacen que las mujeres de un pueblo pequeño no quieran realizarse los estudios por miedo a los comentarios. Tampoco hay medios de locomoción para traer muestras del interior y llevar los resultados después. A pesar de que el diagnóstico del laboratorio está listo en 48 horas, en el interior pueden recibirlo unos tres meses después. Actualmente, una mujer muere cada tres días de cáncer de cuello uterino, pero los especialistas calculan un subregistro del 30%⁴⁰.

En cuanto a la tasa global de fecundidad, ésta ha disminuido desde 1998 (4,1 hijos/as por mujer). Según los últimos datos, el promedio de fecundidad entre mujeres de 15 a 44 años de edad es de 2,9 hijos/as por mujer, aunque existen diferencias según el área urbana (2,5 hijos/as) o rural (3,7 hijos/as), o según el nivel educativo (en el caso de las que sólo completaron cinco años de estudio es de 4,2 hijos/as por mujer, frente a 2,1 hijos/as para las mujeres con 12 y más años aprobados). El descenso de tasa de fecundidad va ligado al incremento del uso de métodos anticonceptivos (desde 1998 aumentó un 27%). Actualmente, la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos entre las mujeres casadas o unidas de 15 a 44 años de edad es de 72,8%⁴¹. A pesar de tal aumento, la población continúa sin tener acceso a la información sobre servicios de salud sexual y reproductiva. Es más, existe un permanente desabastecimiento de insumos del Programa de Control de Métodos Anticonceptivos y del Programa de Planificación Familiar⁴².

El Comité de la Cedaw expresó su preocupación por la alta tasa de mortalidad materna, particularmente las muertes debidas al aborto ilegal, el limitado acceso de las mujeres a la atención de salud, a programas de planificación familiar y a métodos anticonceptivos. Así,

³⁹ *Diario Última Hora*, 3 de abril de 2005.

⁴⁰ *Diario Última Hora*, suplemento *Actualidad*, 25 de abril de 2005.

⁴¹ *Cepep*, 2005, *op. cit.*, págs. 32-35.

⁴² *Cladem y CMP*, 2004, *op. cit.*, artículo 12.

recomendó al Estado paraguayo actuar inmediatamente e implementar medidas efectivas para hacer frente a la alta tasa de mortalidad materna, para prevenir que las mujeres recurran a abortos inseguros y para protegerlas de los efectos negativos sobre su salud. También expresó que era urgente realizar acciones para que las mujeres tengan acceso efectivo a la información y a servicios de salud, en particular a la salud reproductiva y a métodos anticonceptivos asequibles⁴³.

VIH/SIDA

Las mujeres son más vulnerables al VIH (actualmente más del 50% de las personas enfermas de Sida son de sexo femenino)⁴⁴. En Paraguay las estadísticas sobre personas que viven con el virus son dispares, puesto que la fundación Marco Aguayo indica que hay 4.100 casos registrados, el Programa Nacional de Lucha contra el Sida (Pronasida) estima que hay 18.000, pero según datos de las Naciones Unidas la cifra es de 40.000 a 50.000 casos⁴⁵. En el país, la mayoría de las transmisiones se producen por relaciones sexuales no protegidas (80%), por compartir jeringas (5,2%), transfusión de sangre no segura (1,8%) y durante el nacimiento (5%). Esto último es un reflejo de las debilidades del sistema sanitario, ya que son embarazadas que no tuvieron acceso al tratamiento para evitar que su hijo/a nazca con el virus. En Paraguay las mujeres representan el 24% del total de personas seropositivas, registrándose una tendencia a la feminización. En 1992 existían 28 hombres con VIH por cada mujer; actualmente el promedio es de 2,8 hombres por mujer⁴⁶. Ante tal situación, diversas organizaciones impulsan una campaña denominada “Mujeres venciendo el Sida”.

El uso del preservativo está considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el método más eficaz para prevenir el Sida, pero el Ministerio de Salud Pública no ha realizado ninguna campaña a favor del uso de preservativos para prevenirlo ni ha invertido en la compra de condones. La única partida disponible corresponde a donaciones de la Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación Internacional (Usaid), que en 2004 alcanzaron los 400.000 dólares entre preservativos y otros métodos anticonceptivos. Recién este año el Estado proyecta invertir en condones una parte de los 800 millones de guaraníes disponibles para planificación familiar (en el 2005 el presupuesto subió de 250 millones a 800.000 millones). El Pronasida cuenta con materiales educativos que tocan el tema del uso del condón de manera superficial, pero no como eje del mensaje; además,

⁴³ Comité de la Cedaw, *op. cit.*, párrafos 32 y 33.

⁴⁴ *Diario La Nación*, 25 de noviembre de 2004.

⁴⁵ *Diario Noticias*, 2 de diciembre de 2004.

⁴⁶ *Diario Última Hora*, 1 de diciembre de 2004.

recibió este año 100 millones de guaraníes para sus programas de educación, cifra que no corresponde ni al 10% de lo que necesita para impulsar campañas efectivas⁴⁷.

La atención a las personas que viven con VIH/Sida es precaria y totalmente insuficiente. El acceso universal a los antirretrovirales y a medicamentos para enfermedades oportunistas no está garantizado por el Estado, aun cuando la cobertura es mínima; pero más grave aún es la disminución del presupuesto destinado a VIH/Sida, que pasó de 3 millones de dólares en 1998 a medio millón en el 2004⁴⁸.

DERECHO A IGUALES CONDICIONES DE EMPLEO

La Constitución Nacional, en su artículo 88, establece que no se admitirá discriminación alguna entre los trabajadores y las trabajadoras, y que gozan de los mismos derechos y obligaciones laborales, especificando que la maternidad será objeto de especial protección. Así, la mujer no podrá ser despedida durante el embarazo ni mientras duren los descansos por maternidad (artículo 89). El Código Laboral también prevé la no discriminación por maternidad y establece que las empresas con más de 50 empleados/as deben tener una guardería. A pesar de ello, tales derechos no son respetados en Paraguay, pues, por ejemplo, en algunas empresas privadas aplican el test de embarazo antes de contratar a las trabajadoras y tampoco se cumple la norma relativa a las guarderías⁴⁹.

Por otro lado, el desempleo femenino (9%) es mayor que el masculino (6,8%). Además de la discriminación en el acceso al empleo, las mujeres ganan el 73,1% del ingreso mensual de los hombres⁵⁰. La situación se agrava entre las mujeres que habitan en zonas rurales, pues el 90% de ellas recibe menos del salario mínimo legal⁵¹. La tasa de participación laboral es del 63%, siendo superior en el caso de los hombres (76,6%) respecto a la de las mujeres (50,4%). El 65% de las mujeres ocupadas se halla trabajando en el sector terciario (electricidad y agua, comercios, transportes, establecimientos financieros, servicios personales y comunales). La participación femenina en el mercado de trabajo ha ido aumentando (ocupada o buscando empleo), de 41,4% en 1997/1998 a 50,4% en 2004. La tasa de desempleo abierto (personas que buscan empleo) afecta especialmente a las mujeres de entre 15 a 19 años de edad (22,1%)⁵².

⁴⁷ *Diario Última Hora*, 21 de enero de 2005.

⁴⁸ *Diario Abc Color*, 25 de noviembre de 2004.

⁴⁹ *Cladem y CMP*, 2005, op. cit., artículo 3.

⁵⁰ Datos obtenidos de la página web de la Secretaría de la Mujer: <http://www.mujer.gov.py>

⁵¹ Quintos informes periódicos de los Estados partes. Paraguay, op. cit., artículo 11.

⁵² Dgeec. "Indicadores del mercado laboral en Paraguay, Encuesta Permanente de Hogares 2004". Fernando de la Mora, Dgeec.

Desde el ámbito institucional se han llevado a cabo iniciativas para paliar tal situación. En este sentido, y con el apoyo de la OIT, la Secretaría de la Mujer, el Ministerio de Justicia y Trabajo, sindicatos y empresarios/as formaron la Comisión Nacional Tripartita de Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Por otro lado, la Secretaría de la Mujer se constituyó como oficina nacional de la Red Winner (creada por la Asociación Internacional Devnet, Unifem y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con financiación del Ministerio de Relaciones Exteriores italiano), integrada por mujeres emprendedoras de micro, pequeñas y medianas empresas, artesanas, así como por organizaciones y medios de comunicación que abordan temáticas sobre mujeres. La Red ofrece un conjunto de servicios (capacitación, oportunidades de negocios, información, etc.) a las mujeres emprendedoras.

Es especialmente preocupante la discriminación legal que sufren las empleadas domésticas. Más aún cuando el 93% de las personas que trabajan en este sector es de sexo femenino y es uno de los principales ámbitos de ocupación de las mujeres paraguayas (una de cada cinco mujeres que conforman la Población Económicamente Activa Ocupada). Las discriminaciones legales consisten en que el salario mínimo de una empleada doméstica es el 40% del salario mínimo para actividades diversas no especificadas y que, a diferencia del resto de trabajadores/as, no tienen derecho al pago de una bonificación familiar. Tampoco existe la obligación de realizar un contrato por escrito ni de registrarlo, lo cual obstaculiza la posibilidad de las trabajadoras para reclamar sus derechos ante la justicia. Otra discriminación legal está en el período de preaviso, que es menor en el caso del trabajo doméstico. Los/las trabajadores/as de 10 años o más de antigüedad tienen derecho a ser reincorporados o a una doble indemnización en caso de despido injustificado, no así en el caso de las empleadas domésticas. Legalmente, la jornada laboral puede ser de hasta 12 horas diarias, y no tienen derecho al pago de horas extraordinarias. Sólo pueden ser aseguradas al Instituto de Previsión Social (IPS) las empleadas que trabajan en la capital del país (e incluso sin cobertura de todos los riesgos), el resto no tiene derecho al seguro social. Tampoco tienen ningún seguro obligatorio de jubilación⁵³.

Muy vinculado al trabajo doméstico se da el fenómeno del “criadazgo” en Paraguay, donde la mayoría son niñas y adolescentes. Las “criaditas” son trasladadas de sus hogares, normalmente en zonas rurales, a la ciudad para realizar tareas domésticas a cambio de estudio, comida y alojamiento. Ellas viven con las familias, realizando largas horas de trabajo no remunerado, siendo muchas veces objeto de violencia sexual,

⁵³ Bareiro, Line; Soto, Lilian; Valiente, Hugo. “Necesarias, invisibles, discriminadas. Las trabajadoras del servicio doméstico en el Paraguay”. CDE y OIT. Asunción, 2005.

física y psicológica. Debido a los malos tratos y abusos que reciben por parte de algunas familias muchas criaditas se escapan y ante la imposibilidad de volver con su propia familia, acaban en la calle, víctimas de la explotación sexual. Ante tal situación, la OIT, junto a diversas organizaciones sociales y del Estado, lleva a cabo una campaña sobre la prevención y eliminación del trabajo infantil doméstico y mejora de las condiciones laborales de los trabajadores/as adolescentes domésticos/as en Paraguay.

En cuanto a las discriminaciones de las mujeres en el ámbito del empleo, el Comité de la Cedaw observó con preocupación la falta de aplicación efectiva del Código Laboral, tanto en el sector público como en el privado. También mencionó las precarias condiciones de trabajo de las mujeres en el sector informal, así como la escasa inserción de las mujeres en el trabajo formal y la inferior remuneración salarial que reciben las mujeres frente a los hombres. Hizo especial mención a la discriminación de las trabajadoras domésticas y del gran número de niñas que trabajan en este ámbito sin remuneración, instando al Estado a adecuar su legislación interna a los Convenios Nº 138 y 182 de la OIT sobre edad mínima de 14 años para admisión al empleo y sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil⁵⁴.

SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS CÁRCELES

El artículo 20 de la Constitución Nacional prescribe que quienes estuvieren privados/as de libertad cumplirán condena en establecimientos adecuados, evitando la promiscuidad de sexos, y que los/las adolescentes no serán reclusos/as con personas mayores de edad. En cambio, la realidad en el sistema penitenciario paraguayo es otra. A finales de 2004 se denunció ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado la situación en que se encontraban las mujeres del Penal de Emboscada, quienes –compartiendo los mismos pabellones que los hombres– eran sometidas a un estado de prostitución. Tampoco existe una separación entre las condenadas y procesadas (en el penal “El Buen Pastor” –principal lugar de reclusión de mujeres– conviven 167 procesadas con 66 condenadas). En algunos centros están reclusas conjuntamente adolescentes y adultas.

Hay déficit en suministros tan básicos como productos de higiene y para la alimentación⁵⁵. Este año, en “El Buen Pastor” las internas se amotinaron ante las restricciones impuestas por la directora (les cortaron el teléfono, no les permitían reunirse a hablar entre ellas, las mal-

⁵⁴ Comité de la Cedaw, op. cit., párrafos 30 y 31.

⁵⁵ Sin que la intención sea justificar las malas condiciones que afrontan las mujeres en prisión, es necesario señalar que la situación de los hombres es peor aún, especialmente por el alto hacinamiento en el que viven en las cárceles.

trataban y la comida era deficiente)⁵⁶. Pero los problemas no sólo afectan a las reclusas, sino también a sus hijos e hijas: 25 mujeres de “El Buen Pastor” tienen sus hijos/as con ellas y nueve están embarazadas⁵⁷. Así, en este penal capitalino necesitan nebulizadores para los bebés, puesto que la mayoría tiene problemas respiratorios. También les hace falta pañales, ropa para niños/as y artículos de aseo personal, leche en polvo, pues los niños que viven allí no se alimentan adecuadamente⁵⁸.

En las prisiones paraguayas existen varios casos de mujeres condenadas que han sido anteriormente víctimas de violencia doméstica. En “El Buen Pastor” está presa una mujer que fue víctima de violencia física, psicológica y sexual por parte de su marido durante años, incluso la había amenazado con matarla. Tampoco sus hijos escaparon del maltrato de su padre. Como consecuencia de las graves heridas producidas por su pareja fue atendida en más de una ocasión en el hospital de primeros auxilios y también había acudido varias veces a la comisaría para denunciar los hechos, pero le respondían que eran problemas comunes y no hacían nada al respecto. Ante la desesperación de no poder escapar de la violencia de su marido, decidió acabar con ella por sus propios medios. El abogado particular basó su defensa en que el marido había sido asaltado y no le permitió que mencionara que había sufrido violencia familiar. La condenaron a 20 años de prisión, sin ni tan sólo haber declarado ante el juzgado. Hace siete años que está presa.

Existe otro caso de una interna víctima de violencia doméstica que está procesada por el homicidio de su pareja. La policía tampoco hizo nada, a pesar de que en este caso ya estaba en vigor la Ley Nº 1.600. Cuando la arrestaron no se le informó que era por el homicidio de su pareja, puesto que había salido corriendo del lugar de los hechos pensando que sólo lo había herido. En la comisaría ella preguntó de qué se la acusaba, y nadie le respondió. No fue hasta al cabo de unos días, cuando llegó a “El Buen Pastor”, que le aclararon cuál era el delito que había cometido. Su defensora pública sólo acudió en una ocasión a visitarla (hace un año que está en prisión), pero no le informó de su nombre ni de cómo contactarla. En el expediente de “El Buen Pastor” consta que se cambió la persona que iba a ejercer su defensa, pero no indica a quién le fue asignado su caso⁵⁹. Este hecho no es aislado, pues es frecuente que los/las defensores/as públicos/as no visiten a sus defendidos/as, ya sea por exceso de trabajo o por otros motivos.

⁵⁶ *Diario Abc Color*, 7 de noviembre de 2004.

⁵⁷ Datos facilitados por el correccional de mujeres “Casa del Buen Pastor”, el 3 de agosto de 2005.

⁵⁸ *Diario Noticias*, 19 de diciembre de 2004.

⁵⁹ *Testimonios de internas de la cárcel de mujeres “El Buen Pastor”, de Asunción.*

La mayoría de las internas son personas de escasos recursos que no pueden pagarse un/a abogado/a particular. Así, cuando el/la abogado/a no asiste al/ la acusado/a, se le vulnera el derecho de defensa y a un juicio justo.

RECOMENDACIONES

- Aplicación efectiva de las políticas públicas y la legislación relativa a la igualdad entre mujeres y hombres.
- Establecimiento de garantías para el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia.
- Aprobación de una ley de protección de las víctimas de delitos contra la autonomía sexual.
- Revisión de los artículos del Código Penal relativos a la violencia doméstica y a delitos contra la autonomía sexual.
- Aplicación de medidas que apunten a la paridad en el acceso a los cargos públicos y políticos.
- Implementación efectiva y ampliación del presupuesto del Priome.
- Despenalización del aborto.
- Mayor presupuesto en salud sexual y reproductiva, así como para la prevención del VIH y provisión de medicación para todas las personas afectadas por el Sida.
- Modificación de las leyes para igualar los derechos de las personas que trabajan en el ámbito doméstico a los del resto de trabajadores/as.
- Establecimiento de garantías del derecho a un juicio justo para las personas procesadas.

DIEZ AÑOS DE PUBLICACIÓN DEL INFORME DE DERECHOS HUMANOS

En estos últimos 10 años se han producido avances importantes en el ámbito de los derechos de las mujeres, pero todavía queda mucho para conseguir una igualdad real entre mujeres y hombres.

Es importante que el Estado paraguayo haya ratificado instrumentos internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de la OEA – Belém do Pará en el año 1995, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (2001), el Protocolo Facultativo de la Cedaw (2001), el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos el Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la

pornografía (2003), la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional – Convención de Palermo en el año 2003, y el Protocolo de Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que contempla la Convención de Palermo (2004).

Especialmente importante ha sido la ratificación del Protocolo Facultativo de la Cedaw, mediante el cual el Estado se compromete a realizar un seguimiento de la implementación de la Convención en el país. A pesar de tal obligación, el Estado paraguayo no presentó los informes de seguimiento durante nueve años. Después de la denuncia de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, Paraguay informó ante el Comité de la Cedaw del estado de la Convención.

Un gran avance fue la aprobación de la Ley Nº 1.600/00 contra la violencia doméstica. Este instrumento ha permitido a muchas mujeres víctimas de violencia tener una norma que pueden utilizar ante el Juzgado de Paz. Como consecuencia de la entrada en vigor de la ley, en los últimos años ha aumentado el número de denuncias por malos tratos. A pesar de la existencia de la Ley Nº 1.600, su aplicación no es efectiva debida a varios factores. Uno de los más importantes es la falta capacitación y sensibilización de las personas que participan en la administración de justicia (desde el personal que atiende a la víctima cuando denuncia hasta el/la mismo/a juez/a de Paz). También es deficiente la atención a las personas que han sufrido violencia doméstica, faltan servicios que eviten su revictimización. La situación es más grave para las mujeres que viven en zonas rurales, puesto que para ellas es mucho más difícil acceder a los mecanismos de denuncia (tanto por las distancias como por la falta de información).

El Código Penal también fue modificado y eliminó disposiciones que claramente discriminaban a la mujer, pero aún persisten artículos que deberían ser revisados. Las penas en los casos de delitos que afectan mayoritariamente a mujeres son mínimas, y en el supuesto del delito de violencia familiar sólo se impone una multa al agresor. Aparte de esta normativa, no hay un resarcimiento adecuado por parte de los/as jueces/zas en la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres. Una penalización tan ínfima no es disuasoria y refleja la ideología patriarcal que aún persiste en la legislación y justicia paraguaya.

Un elemento que es muy útil para visualizar la realidad del problema de la violencia de género es la elaboración de un registro. No existe un sistema que registre todos los casos de violencia en Paraguay. Existen diferentes instituciones que tienen datos de los casos que manejan, pero no hay datos globales. No hay una política estatal de tener datos permanentemente actualizados.

En estos 10 años se ha empezado a hablar del tema del aborto. Su penalización produce un alto número de abortos clandestinos que en muchos casos se realizan bajo condiciones muy precarias, poniendo en peligro la vida de la mujer. Es más, la muerte por las complicaciones derivadas del aborto se ha convertido en la principal causa de muerte de las mujeres en Paraguay. Tal como recomendó el Comité de la Cedaw, el Estado debería hacer algo para evitar la muerte de mujeres por causa del aborto.

En el ámbito electoral fue importante –aunque insuficiente– el establecimiento de una cuota mínima de participación femenina del 20%. A pesar de que se consideró un gran avance cuando fue aprobado, actualmente es necesario el establecimiento de una cuota del 50% para garantizar la igualdad en el acceso a cargos públicos.

El Código Laboral fue reformado y se eliminaron varios artículos discriminatorios contra las mujeres, pero el gran tema olvidado fue el trabajo doméstico. La legislación es altamente discriminatoria contra las trabajadoras del servicio doméstico. Es importante que en los últimos años se ha empezado a discutir este tema, así como el fenómeno de las “criaditas”.

Es importante mencionar la inclusión del sistema de género en el aparato estatal. En 1995 la Secretaría de la Mujer era bastante incipiente. Con el tiempo ha ido aumentando sus acciones. A pesar de los esfuerzos de esta oficina estatal para transversalizar el tema género, aún no se ha logrado una incorporación total en los diferentes ministerios y organismos del Estado.

La trata de personas (sobre todo mujeres, niñas y adolescentes) se ha empezado a visualizar en estos dos últimos años. Las fronteras paraguayas son muy vulnerables, y por lo tanto perfectas para las mafias que se dedican a traficar con personas. El Estado ha empezado a realizar acciones con la finalidad de erradicar este fenómeno, inaugurando recientemente un Centro de Referencias en el tema Trata de Personas. Tales acciones son importantes, pero no suficientes para llegar a una disminución del tráfico de seres humanos.

También el tema de derechos sexuales y reproductivos es nuevo de estos últimos cinco años. Ha habido una disminución de la tasa de fertilidad de las mujeres paraguayas, acompañado de un aumento del uso de métodos anticonceptivos. De todos modos, el presupuesto destinado por el Estado a estas cuestiones es muy escaso; también es preocupante la escasez de atención médica especializada y de medicación para tratar los casos de VIH.

En cuanto a la educación, el Priome podría ser un buen instrumento para aplicar el género en cuestiones educativas si no fuera por la falta de presupuesto adecuado. A nivel universitario, ni tan sólo existe una mínima perspectiva de género en el currículum educativo.

El principal problema para encarar la erradicación de las discriminaciones contra las mujeres en Paraguay es la debilidad institucional. Así, la efectiva aplicación del Plan de Igualdad de Oportunidades depende mucho de la voluntad del gobierno o, incluso, de las personas al cargo de los diferentes servicios de la administración.

Hacia una sociedad paraguaya sin discriminación

Grupo de Acción Gay Lésbico Transgénero (GAG-LT)

El Estado paraguayo está obligado por mandato de su Carta Magna a garantizar la igualdad y el respeto de los derechos de personas con orientación e identidad sexual diversa. Está exigido a implementar campañas educativas que promuevan la tolerancia y el respeto a las diferencias, así como brindar condiciones de una vida digna, de justicia eficiente y equidad social.

INTRODUCCIÓN

La sociedad paraguaya solo desde aproximadamente siete años lleva en su seno a organizaciones que aglutinan a lesbianas, gays, travestis y transexuales.

Este surgimiento –podríamos sostener– no es casual que se haya desarrollado en el marco de la joven democracia que abraza a nuestro país. La dictadura stronista, además de haber sometido a organizaciones campesinas, de estudiantes, dirigentes de organizaciones, miembros de partidos políticos, también hizo lo mismo con personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Y las ha castigado con la misma violencia como lo ha hecho a ciudadanos/as que han tenido la valentía de desear un país con justicia y libertad.

Frente a este pasado, 16 años de democracia no han sido suficientes para deconstruir el autoritarismo, la uniformidad, militarismo, represión, censura, exilio, muerte, que se ha instalado como moneda corriente en el relacionamiento del Estado con la ciudadanía paraguaya. Muestra de ello es que hoy no solo el gobierno sigue operando con sus viejos vicios, sino sectores sociales como las iglesias y algunos partidos políticos siguen en elejercicio de desconocer una realidad diversa en pensamientos, expresiones y a personas con orientación sexual diferente y con identidad de género diversa.

Más allá del marco local, el contexto latinoamericano pinta un panorama auspicioso en cuanto al futuro de las conquistas de las reivindicaciones para el sector homosexual. Así, aún en el continente el gobierno de los Estados Unidos, dirigido por George W. Bush, sistemáticamente promueve políticas de extrema derecha asociadas a la violación de los derechos humanos. La ciudad autónoma de Buenos Aires (Argentina) cuenta actualmente con la Ley de Unión Civil¹ entre personas del mismo sexo y el mismo caso se da en algunos estados del Brasil. En América del Norte, México es reconocido por sus años de luchas y el Congreso canadiense ha dado su voto a favor del matrimonio entre homosexuales.

Por otra parte, varios gobiernos europeos han demostrado apertura ante los reclamos de los derechos del sector gay, lésbico y transgénero reconociendo uniones legales, adopción de hijos/as, como también beneficios sociales a parejas.

Dicha apertura ha encontrado sin embargo su contrapeso en la reciente elección de Joseph Ratzinger (Benedicto XVI) como máximo pontí-

¹ Ley N° 1.004/LCABA/02. Tomado de http://www.buenosaires.gov.ar/areas/leg_tecnica/sin/index.php

ficé de la Iglesia Católica, quien desde sus tiempos de titular de la Congregación para la Doctrina de la Fe ha descalificado al sector y generado un contexto proclive a odios e intolerancias, que quizás más tarde deba la iglesia de Roma hacerse responsable cuando ya lamentablemente dirigentes y ciudadanos/as hayan sido víctimas de agresiones o de muertes.

En suma, a diferencia del contexto internacional –que muestra un balance auspicioso respecto a las reivindicaciones para el sector homosexual–, durante el año 2005 en nuestra sociedad se dieron hechos graves de homofobia que serán abordados en el presente informe, y que tuvieron su pico más alto en las expresiones de fundamentalismo religioso que impidieron la aprobación de un proyecto de ley que pretendía proteger los derechos de víctimas de abuso sexual ante el temor expresado por sus voceros de que dicha legislación abriría una puerta a los casamientos homosexuales.

MARCO LEGAL

La Constitución Nacional promulgada en 1992 reconoce en su artículo 46 la igualdad de las personas. Este artículo dispone que *“todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos”* y que *“no se admiten discriminaciones”*. También establece que *“el Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien”*. Después de 13 años de vigencia del artículo 46, los legisladores han hecho poco y nada para adecuar las leyes que discriminan a las personas por su orientación sexual.

El Estado paraguayo está obligado por mandato de su Carta Magna a garantizar la igualdad y el respeto de los derechos de personas con orientación e identidad sexual diversa. Está exigido a implementar campañas educativas que promuevan la tolerancia y el respeto a las diferencias, como brindar condiciones de una vida digna, de justicia eficiente y equidad social. Vivir en el discurso de la democracia no es suficiente para frenar los maltratos, atropellos, despidos laborales, expulsión del seno familiar. Urge por lo tanto políticas públicas que materialicen en la realidad los derechos que cualquier ciudadano/a tiene reconocidos en Paraguay.

Desde 1999 el Gaglt viene denunciando las abiertas discriminaciones a personas con orientación sexual diversa contenidas en los cuerpos legales vigentes en Paraguay. Seis años después nada de esto ha cambiado.

Restricciones a derechos en el Código Civil

Con la reforma parcial del Código Civil introducida por la Ley N° 1/92 se redefine el matrimonio civil en los siguientes términos: “Artículo 4. El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un varón y una mujer legalmente aptos para ello, formalizada conforme a la ley, con el objeto de hacer vida en común”. Esta formula limita toda posibilidad a las parejas homosexuales a acceder a esta institución jurídica y de acogerse a los beneficios legales que otorga el matrimonio.

Esta misma ley, en su artículo 83, establece que “la unión de hecho constituida entre un varón y una mujer que voluntariamente hacen vida en común, en forma estable, pública y singular, producirá efectos jurídicos conforme a la presente ley”. Este artículo deja bien en claro que única y exclusivamente las uniones de hechos conformadas por un varón y una mujer tendrán efectos legales. Al reconocer este tipo de uniones, anula toda posibilidad de protección jurídica a uniones de personas del mismo sexo. Sin embargo, la variante de que los componentes de esta unión de hecho sean de distintos sexos garantiza una serie de derechos establecidos por el ordenamiento jurídico.

Aunque la Ley N° 1.136/97

“De adopciones” no menciona como impedimento para ser padre o madre adoptivos la homosexualidad, la imposibilidad de ser reconocido legalmente como pareja, anula la posibilidad de la adopción conjunta o de adopción del hijo/o biológico de la pareja.

El no reconocimiento de las uniones de personas del mismo sexo impide ser heredero de la persona con quien se ha llevado una relación afectivo-sexual. Anula además la protección brindada por la Ley N° 1600 “Contra la violencia doméstica” de disfrutar los beneficios de planes médicos conyugales, de poseer bienes en comunidad, entre otras cosas, y cualquier intento de hacer valer alguno de estos derechos ante las autoridades sería rápidamente denegado².

La homosexualidad como agravante en el Código Penal

En el Código Penal se encuentra una de las discriminaciones más notorias, expuesta en su artículo 138 que establece: “el que siendo mayor de edad realizara actos sexuales con una persona del mismo sexo, menor de 16 años, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa”. Sin embargo, remontándonos al artí-

² Ver caso Hindú, informe “Derechos Humanos en Paraguay 1999”, pág. 106.

culo 137, el mismo cuerpo legal nos dice que “(...) quien siendo mayor de edad persuada para realizar actos sexuales a una mujer de entre 14 a 16 años, es castigado sólo con multa (...)”.

En esta reglamentación se hace una doble discriminación: en primer lugar hacia las personas homosexuales, siendo que la ley considera que son merecedoras de un castigo mayor en comparación al mismo hecho producido por una persona heterosexual. Y en segundo lugar hay discriminación hacia las mujeres porque se considera que por ser mujer la víctima, la sanción debe ser menos gravosa. Hay que tener en cuenta que el bien jurídico protegido aquí es la libertad sexual y no la heterosexualidad³.

Despidos laborales sin respaldo legal

En cuanto al Código Laboral, que declara la no discriminación en el trabajo en su artículo 9, esta garantía no hace referencia a la discriminación por motivos de orientación sexual, dejando a las personas homosexuales expuestas a despidos de sus lugares de trabajo y sin ningún respaldo legal. Este artículo no fue ampliado a pesar de que en diciembre de 1998 fue firmada por Paraguay la declaración socio-laboral del Mercosur⁴, en la que se menciona explícitamente en el artículo 1 el derecho a no ser discriminado/a por causa de la orientación sexual.

Por último, todas las leyes citadas en este análisis del marco legal violan claramente el principio de igualdad entre las personas –consagrado en la Carta Magna y en los principales instrumentos internacionales firmados y ratificados por Paraguay. Mientras estas leyes discriminatorias sigan vigentes, será imposible lograr una igualdad real entre las personas.

La discriminación en instituciones educativas

A partir de la vigencia de la reforma educativa, fueron insertándose en el currículo varios ejes transversales, tales como la educación en valores, la equidad y la perspectiva de género, entre otros. En lo que respecta a la educación sexual que debe impartirse en las aulas, sigue cuestionada en varios sectores de la sociedad, así como desde algunas iglesias, la importancia o no de enseñar a niños, niñas y adolescentes sobre la sexualidad humana.

³ Para un estudio más detallado de este artículo ver “Derechos Humanos en Paraguay 2000”, pág. 125/28.

⁴ Tomado de <http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/worker/doc/otros/iiii/>

Surge así lógicamente la controversia en cuanto a la orientación sexual, ya que predomina tanto en el currículo como en el trabajo dentro del aula la "normalidad", que corresponde única y absolutamente al modelo heterosexual, y esto queda más puntualizado aún en instituciones educativas vinculadas a sectores religiosos.

Hablar de sexo sigue siendo tabú, y si aún en nuestros tiempos se estigmatiza y se discrimina situaciones tales como las de adolescentes embarazadas, las relaciones sexuales prematrimoniales, el uso del preservativo, etc., mayor es la dificultad para hablar de la homosexualidad como algo a ser aceptado o respetado.

Dentro de las aulas, en el marco de la reforma educativa, siguen persistiendo prácticas educativas sexistas que no solo dificultan obtener resultados positivos reales en la formación integral de ciudadanos y ciudadanas, sino que a la vez perpetúan contenidos y preconcepciones homofóbicas y de alto nivel discriminatorio, que marcan con huellas emocionales imborrables a niños y niñas que son sujetos de tales discriminaciones.

En la mayoría de los casos, el fomento de las discriminaciones no siempre proviene de los mismos niños y niñas, sino que son los/as docentes los que facilitan que tales discriminaciones se sucedan.

Cuando lo diferente aparece en el contexto educativo, es decir varones delicados, sumisos, muy ordenados, sensibles, con poca afición hacia los deportes y mayor interés hacia las artes, o bien en el caso de las niñas que presentan actitudes enérgicas, de liderazgo, deportistas, con mayor interés hacia el fútbol, ya son individualizados/as como los "raros" o bien los "diferentes", fenómeno que implica la visita al departamento psicológico de la escuela para solucionar el "problema", lo que genera a su vez una marcada preocupación por parte del docente y los padres.

Asumir con naturalidad que los gustos, caracteres y hasta las mismas actitudes de los niños, niñas y adolescentes que no se ajustan a lo que llamamos "normal" forma parte de un enfoque propiamente diverso en las distintas personalidades que constituyen un grupo, pasa a ser materia pendiente dentro de la formación y del ejercicio docente, por lo que se enfatiza que las discriminaciones que sufren a diario estos niños y niñas, por solamente "cometer el error", actitud involuntaria que no se adecua a lo que el sistema social exige, revela contundentemente la responsabilidad de los/as docentes en fortalecer tales discriminaciones.

El lenguaje, las actitudes, algunas situaciones y el resto del sistema social favorecen a que muchos niños y niñas sean objetos permanentes de humillaciones, que dan como resultado el aislamiento social

por parte de estos niños y niñas, que repercute de manera negativa en el respeto al derecho inherente con el que cuentan a ser respetados/as sin ningún tipo de discriminación.

En el ámbito que corresponde al tercer ciclo de la educación escolar básica y al nivel medio, espacio compuesto por adolescentes, los temas –tanto de la identidad de género así como de la orientación sexual– son enfocados con más notoriedad, aunque eso no excluye en algunos casos el contenido discriminatorio hacia los/as diferentes.

En la búsqueda de un Estado laico

En el mes de mayo se presentó un proyecto de ley que crea el “Programa Nacional de prevención y asistencia a las víctimas de hechos punibles contra la autonomía sexual y contra menores”, cuyo principal fundamento otorga protección desde el Estado a los niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de actos violentos y violaciones.

El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, lo que provocó una encendida reacción de parte de grupos religiosos cristianos (iglesia Raíces, Iglesia Católica, entre otros), quienes instaron desde una coalición que dieron por llamar Federación por la Vida y la Familia (Fedavifa) al rechazo del proyecto, que, a decir de ellos, facilitaba el matrimonio entre personas del mismo sexo.

A fin de desviar la discusión del proyecto a ese ámbito, utilizaron todos los espacios mediáticos posibles para “discutir el pecado de la homosexualidad”, lanzando una verdadera campaña de homofobia que tuvo como corolario una manifestación pública en la misma explanada de la catedral metropolitana. Esta campaña finalmente condujo al rechazo del proyecto de ley.

En todo momento, en el discurso que utilizaron, se repetían conceptos completamente extemporáneos, ignorando los avances y aportes que la ciencia ha otorgado. Puesto que las convicciones religiosas dan la espalda a los avances científicos, este fundamentalismo se plantea como un problema que es necesario replantearse, ya que a pesar de estar garantizado en la Constitución el establecimiento de un Estado laico, se hizo evidente con esta experiencia que los intereses sociales una vez más son ignorados frente a intereses sectarios.

Situación epidemiológica de los hombres que tienen sexo con otros hombres

El impacto causado por el Sida obligó a los liderazgos particulares y organizaciones gays a generar una respuesta efectiva ante la urgencia que

suponía la epidemia. Este aporte de las organizaciones homosexuales es poco publicitado y a veces hasta ignorado, desconociendo de esta forma el papel de la sociedad civil organizada que tuvo la responsabilidad histórica de planificar y validar a través de la experiencia los métodos y estrategias utilizados posteriormente por organismos estatales creados para este fin. En Paraguay, las organizaciones de gays, lesbianas y transgéneros, aún cuando fueron creadas para reivindicaciones de derechos civiles y políticos principalmente, rápidamente tuvieron que adoptar reivindicaciones de los derechos sociales y dar un énfasis especial a la situación de las personas con Sida.

El primer caso de Sida apareció en un hombre en el año 1985, teniendo un crecimiento sostenido y constante. La vía principal de transmisión es la sexual (78%), siendo los hombres el grupo genérico más afectado (74,4%), concentrándose en poblaciones específicas (hombres que tienen sexo con otros hombres, trabajadores del sexo y usuarios de drogas intravenosas), con una mayor incidencia en zonas urbanas.

Los hombres que tienen sexo con otros hombres y en especial las poblaciones de difícil acceso (travestis y transexuales) han sido, y siguen siendo, los grupos más afectados y vulnerables a las infecciones por VIH y/o la adquisición de infecciones de transmisión sexual, y a las enfermedades y muerte secundarias a estas.

A pesar que la epidemia está concentrada en estos grupos (los datos epidemiológicos resultan evidentes), los organismos encargados de generar las políticas de salud pública los han ignorado abiertamente a favor de la "población general", asumiendo y promoviendo la idea de que la epidemia se está "feminizando" y "heterosexualizando". No existen datos para afirmar este cambio de rumbo de la epidemia, la proporción hombre/mujer sigue siendo de 3 (por cada mujer infectada existen tres hombres).

El resultado lógico de esta interpretación heterosexista de los datos epidemiológicos es la falta de asignación de recursos y la mínima voluntad política para generar estrategias de prevención dirigidas a la atención primaria de estos grupos.

Desde el Programa Nacional de Lucha contra el Sida (Pronasida), organismo responsable de generar estas estrategias, no se han realizado hasta la fecha una sola campaña o acción de prevención orientada a las poblaciones de hombres que tienen sexo con otros hombres, siendo todas ellas generalistas y masivas, ignorando abiertamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/Sida (Onusida)

acerca de la vigilancia y las estrategias de prevención acorde al perfil epidemiológico de cada país.

En Paraguay la epidemia es de tipo concentrada, de poca prevalencia en población general y alta en poblaciones específicas. Cuando la prevalencia de la infección es baja, se recomienda que en un comienzo los recursos de la prevención deberán dirigirse mayormente a los grupos de mayor riesgo o más vulnerables, pero poco a poco el esfuerzo deberá extenderse para llegar a los grupos con menos riesgo de infección por VIH.

Esta negligencia por parte de los responsables de crear las políticas públicas en salud (incluidas las organizaciones civiles) seguirá favoreciendo la expansión de la epidemia dentro de los grupos más vulnerables aumentando la morbilidad y mortalidad en forma directa, y a grupos menos vulnerables indirectamente.

Situación de las personas transgéneros ante el VIH/Sida

Muchos hombres que tienen sexo con otros hombres, en especial los transgéneros y transexuales, no acuden a los servicios de salud y a los centros de testeo voluntario. Por un lado existe gran desconfianza y recelo en relación al Estado y sus aparatos, que históricamente han tenido un rol represivo hacia ellas, y por el otro existe discriminación hacia este sector, que muchas veces resulta más evidente que la originada por la orientación sexual diversa.

Esto se traduce en las denuncias de malos tratos en los hospitales públicos, en especial por parte de los proveedores de la salud (consejeros, médicos, enfermeros/as etc.) y el largo historial de desabastecimientos de antiretrovirales que ha sufrido el Pronasida en los últimos 10 años (doce cortes); a esto se suman las actitudes homofóbicas e intolerantes que han sido el común denominador durante años, contribuyendo de esta manera a una percepción poco "amigable" por parte del Pronasida hacia personas con orientación sexuales diversa.

Otra variable a tomar en cuenta es la centralización de los servicios de salud y de testeo voluntario. Esto obliga a los potenciales usuarios a acudir a un solo lugar y horario. El Pronasida posee horarios "imposibles" para la mayoría de las transgéneros y transexuales trabajadoras sexuales, ya que sólo provee el servicio de testeo y consejería en horas de la mañana (de 7 a 12 horas). Esto implica sacar números una a dos horas antes para luego esperar igual cantidad de tiempo para ser atendidos. Muchos transgéneros para acceder al servicio no tendrían que trabajar la noche y madrugada anterior o, de lo contrario, ir

sin dormir directamente. Si la primera barrera es superada (horario), se presenta la segunda: la distancia.

No es difícil imaginar que para una persona con una identidad de género no convencional resulta poco motivante el hecho de salir a plena luz del día, utilizar los servicios de transporte público, aguardar por horas en la sala de espera de un hospital estatal, para luego realizar el mismo trayecto hasta la seguridad de su hogar. Las miradas, los comentarios e inclusive la violencia verbal o física son casi inevitables para una sociedad poco acostumbrada a estas expresiones de la sexualidad que se apartan de los modelos tradicionales.

Medios de comunicación y orientación sexual

El presente año se ha caracterizado por una mayor difusión a temas que hacen a la orientación homosexual, radios, televisión y periódicos han invertido tiempo y espacios a las luchas de organizaciones de gays, lesbianas y transgéneros tanto a nivel nacional como internacional.

En el contexto internacional lo acentuado este año fue la unión civil reconocida por el gobierno español, como también por el Parlamento de Canadá, y la aprobación en Suiza de la adopción por parte de estas personas. Por otra parte, la reacción de la Iglesia Católica, con la elección del nuevo papa Ratzinger, ha marcado la explícita tendencia discriminativa de este sector religioso.

En el contexto nacional los medios de comunicación han publicado fundamentalmente cuestiones sobre la marcha por los derechos de gays, lesbianas y transgéneros y las vinculadas al proyecto de ley de hechos punibles contra la autonomía sexual y contra niños, niñas y adolescentes.

El diario *Abc Color* este año ha dado muestras de una máxima expresión de discriminación hacia el sector homosexual, en la publicación semanal del suplemento escolar, que en forma de serie ha expuesto a la opinión pública que la homosexualidad es una perversión sexual y una anormalidad, ambas conductas no tolerables. Las publicaciones están suscritas por la abogada Carolina Rodríguez Amarilla (pág. 18 de fechas 7, 14 y 21 de junio de 2005).

La discriminación también estuvo presente en varios programas de radio en los que periodistas han expresado una acentuada discriminación hacia la población gay, lesbica y transgénero, argumentando que lo normal es la heterosexualidad, y que no se espere ningún tipo de ley que garanticen los derechos de personas homosexuales, descono-

ciendo los conocimientos científicos de la OMS y la Sociedad Americana de Psiquiatría.

Continúa la expulsión de gays en conocido centro comercial

En el transcurso de este año nuevamente hemos recibido denuncias de varones homosexuales expulsados por guardias de seguridad del centro comercial *Mall Excelsior* por la sola presunción de su homosexualidad y basados en la expresión de género, violando el derecho a la igualdad de todas las personas.

Luego de tres años de seguimiento a este caso hemos notado que actualmente la discriminación es más abierta hacia varones homosexuales. El argumento de la gerente general del negocio (en una carta enviada al Gagli el año 2004), justifica que este espacio público esta destinado a la diversión de la familia, y que los homosexuales “no son bienvenidos” a este espacio.

Tanto en las puertas de acceso al local como en las puertas de los baños masculinos rezan carteles con la inscripción “la empresa se reserva el derecho de admisión”, queriendo de este modo sostener hechos de discriminación de los cuales son responsables los dueños de la empresa.

La gerente general y los guardias de seguridad se hallan en una campaña ferviente de expulsión y “limpieza” del local recreativo no solo despidiendo personas que consideran homosexuales, sino también a personas con capacidades diversas y niños/as en situación de calle.

Falta de protección contra la violencia doméstica

En marzo de este año, AP, de 20 años, se acercó al local de nuestra organización solicitando asistencia legal para buscar alternativa de solución a la situación de amenaza de muerte por parte de su ex pareja del mismo sexo.

Este hecho sobrevino después de la ruptura de una relación afectivo-sexual de cuatro años. AP, en el intento de dar solución a este problema, recurrió a la Fiscalía, cuyos funcionarios le respondieron que no pueden intervenir en estos “tipos de asuntos”.

Esto demuestra claramente la inexistencia de protección ante estas situaciones por parte del orden jurídico nacional, a pesar de la vigencia de la Ley Nº 1.600/00 “Contra la violencia doméstica”, que en su artículo primero señala que “*protege a toda persona que sufra lesiones, maltratos físicos, psíquicos o sexuales por parte de uno de los*

*integrantes del grupo familiar, que comprende el originado por el parentesco, en el matrimonio o unión de hecho*⁴⁵. Esta infeliz redacción deja a las parejas del mismo sexo fuera de su protección ya que las leyes paraguayas no reconocen ningún efecto legal a los matrimonios y uniones de hechos de este tipo.

En consecuencia, AP no ha tenido garantizado en el marco legal paraguayo vigente ninguna alternativa de solución a esta situación que atenta contra su integridad física, síquica y dignidad humana, exponiéndolo a maltratos continuos y sin poder acceder a la justicia.

Asumir públicamente la homosexualidad genera inseguridad

Durante las actividades de la semana por los derechos de gays, lesbianas y transgéneros, compañeros miembros del Gaglt fueron foco de violencias verbales.

Esto se debe a las varias apariciones en los medios de comunicación, y al abordaje de la temática homosexual por parte del periodismo local.

Por otra parte, otro activista gay en horas de la mañana recibió agresión verbal y amenaza de muerte proferida por un transeúnte en calles céntricas, quien al reconocer al activista le señaló con el dedo y le dijo “yo te conozco y te voy a matar”. Meses después, en el marco de la semana de los derechos de gays, lesbianas y transgéneros, al mismo miembro de la organización, desde un vehículo, se le reiteró la amenaza y los insultos.

Intendente de Asunción no firma permiso para utilización de plaza para acto público

En el mes de mayo el Gaglt acercó a las oficinas de la Municipalidad de Asunción una nota de permiso para la utilización de un espacio público, la plaza frente al Panteón de los Héroes, con motivo de la marcha de clausura de la semana de actividades por los derechos de gays, lesbianas y transgéneros.

Esta nota no fue respondida por las autoridades responsables. Las continuas llamadas exigiendo respuesta fueron desviadas con excusas, en ciertos momentos argumentando que el permiso para una actividad de esa índole solo podía ser firmado por el intendente de Asunción, Enrique Riera.

La actividad pudo realizarse, pero con muchas tensiones ya que los oficiales a cargo de la custodia del Panteón de los Héroes solicitaban el permiso correspondiente para la utilización de la plaza.

Varias acciones públicas realizadas en ese lugar por otras organizaciones sociales fueron comunicadas a la municipalidad y en menos de 24 horas obtuvieron el permiso, pero al ser solicitado por una organización de homosexuales, el permiso fue rechazado obligando a la organización a salirse del marco de procedimientos para utilización de espacios públicos.

RECOMENDACIONES

- Modificar los textos escolares donde aparecen temas en los que la homosexualidad es tratada como una enfermedad o un pecado.
- Incluir en los programas de estudios escolares y secundarios valores que promuevan la igualdad y la no discriminación.
- Promover políticas culturales de respeto hacia la diversidad sexual, que incluyan a niños, niñas y adolescentes con orientación sexual diferente.
- Incorporar en toda la legislación la protección específica contra toda forma de discriminación por orientación sexual.
- Incorporar en la legislación paraguaya la penalización de toda forma de discriminación.
- Hacer cumplir la declaración de la Constitución Nacional sobre la igualdad de todas las personas, eliminando las leyes discriminatorias y homofóbicas, como las del Código Civil, el Código Penal y el artículo 8 de la Ley de Sida (Nº 102/91), mencionadas en este informe.
- Incorporar en el Código Laboral una protección contra la no discriminación por orientación sexual basada en la declaración socio-laboral del Mercosur.
- Asignar recursos materiales y humanos proporcionales al perfil epidemiológico: a mayor prevalencia de infecciones de transmisión sexual, VIH/Sida, mayores recursos.
- Diseñar y ejecutar estrategias de prevención de VIH/Sida dirigidas a poblaciones y subpoblaciones de hombres que tienen sexo con otros hombres teniendo en cuenta las características y especificidades de sus relaciones.
- Promover la descentralización de los servicios de testeo y consejería abriendo centros centinelas en lugares y horarios ac-

cesibles especialmente a las transgéneros y hombres trabajadores sexuales.

DEL SILENCIO A 10 AÑOS DE EXPRESIÓN

El Estado paraguayo a lo largo de su historia ha desconocido las reivindicaciones y los derechos de gays, lesbianas y transgéneros; ni siquiera ha realizado alguna recopilación de hechos vinculados a la temática homosexual en los años transcurridos, salvo ciertas publicaciones en periódicos locales de la época.

La homosexualidad es un tema ubicado en el silencio, incluso en el marco del auge de la joven democracia paraguaya. Diez años después de estas libertades, en 1999 surgen organizaciones de reivindicaciones de gays, lesbianas y transgéneros; a los cinco años de la publicación del informe “Derechos Humanos en Paraguay”, aparece el primer análisis de la problemática, que intenta resumir todos los años perdidos para ganar un espacio de respeto a estos derechos.

El capítulo sobre derechos de gays, lesbianas y transgéneros del año 1999 abordó los casos más significativos acontecidos en la dictadura; uno, el caso Bernardo Aranda, en el año 1959, locutor de radio que fue muerto quemado y de quien se sospechaba que era homosexual, que dio origen a la estigmatización del número 108 y un quemado. El otro, el caso acaecido en el año 1982 relativo a la muerte del joven Mario Luis Palmieri, estudiante del colegio San José, secuestrado y muerto en situación muy violenta, hecho vinculado también a ajustes entre homosexuales. En ambos casos la persecución de la dictadura no conoció de ningún tipo de piedad, la cárcel y el exilio fueron los resultados, la justicia seguía su largo adormecimiento a pedir de boca del dictador y mandatarios internacionales.

El informe del año 1999 también viene cargado de los primeros análisis de la situación constitucional en relación a la no discriminación, se da reconocimiento al artículo 46 constitucional, el primero en la reflexión, que garantiza la igualdad de las personas; surge el argumento básico de lucha para las organizaciones de gays, lesbianas y transgéneros. Además, existe un exhaustivo estudio de los Códigos Civil y Penal para detectar los niveles de discriminación en estos instrumentos legales.

El año 2000 se abordan los acuerdos y pactos internacionales firmados por Paraguay, en los que se garantiza la no discriminación por orientación sexual como en la declaración socio-laboral del Mercosur, firmada en diciembre de 1998, en la que se menciona explícitamente

en el artículo 1 el derecho a no ser discriminado/a por causa de la orientación sexual.

Además se publican algunas denuncias por despido laboral y de violación de derechos usando nombres ficticios para casos reales, garantizando el anonimato de los/as denunciantes, ya que al salir a la luz pública los casos desembocarían inevitablemente en una mayor discriminación. Los casos de despidos laborales por homosexualidad femenina fueron marcados.

En el informe del año 2001 el aspecto resaltante estuvo en la violencia de la que son víctimas a diario las travestis. Se aborda con detalles también los convenios internacionales firmados por Paraguay y los que contienen la no discriminación por orientación sexual. En particular se presentan casos de violencia doméstica en familias constituidas por personas del mismo sexo.

Para el año 2002 se han presentado denuncias de despidos laborales por discriminación, aunque ciertamente todas fueron de forma anónima, ya que haciendo público estos casos, las personas se exponen a la discriminación por partida doble. En ese año además resaltó el caso de Alberto Pérez Mesa, quien reclama derechos sucesorios ante la muerte del arquitecto Pindú.

En el 2003 los hechos de discriminación en el seno familiar fueron permanentes: padres y madres que sometían a sus hijos/as a iglesias para “curarlos/as” o directamente fueron expulsados de la familia. El tema VIH presenta un análisis desde el marco legal hasta los recortes de medicamentos a los pacientes. Como todos los años se publica la lista de denuncias de discriminación a gays, lesbianas y transgéneros.

Por último, en el año 2004 lo resaltante fue el conflicto que generó el maltrato y expulsión a homosexuales del local comercial Mall Excelsior.

Adicionalmente, se registró en el año que el entonces presidente del partido Colorado, Herminio Cáceres, manifestó públicamente que en esa organización no se permitirían homosexuales. Por otra parte, aparece el proyecto de ley contra la discriminación que ha estado todos estos años en estudio sin obtener ningún resultado, mientras que en la Municipalidad de Asunción la concejala Gladys Rodríguez promueve el proyecto de ordenanza municipal para relocalización compulsiva de trabajadores y trabajadoras sexuales travestis, gays y lesbianas.

Estos seis años en que el Gaglt presentó el capítulo sobre orientación sexual en el marco del informe de la Codehupy han permitido a la organización acercarse cada año más a la problemática que afecta al sector, como también se ha caído en la cuenta que mucho de lo que se ha denunciado como violación a los derechos humanos continúa sin ser remediado por el Estado paraguayo.

Faltan políticas claras para abordar los problemas migratorios

Jacqueline Ortega
BASE. Investigaciones Sociales

El éxodo de nacionales al exterior fue uno de los fenómenos más resaltantes en los medios de comunicación, así como el aumento del éxodo rural-urbano, que en la gran mayoría de los casos fue debido a cuestiones económicas, lo que pondría en entredicho el anuncio gubernamental de la disminución de los niveles de pobreza. La falta de políticas claras para abordar los problemas migratorios (tanto de la situación de los extranjeros en el país como de los compatriotas que quieren salir o viven en el exterior) caracterizó al país en el 2005. La migración interna, la situación planteada por los productores brasileños, principalmente en relación al cultivo de la soja, y los conflictos en la frontera son temas pendientes para el gobierno paraguayo y que tendría que considerarlo como prioridad.

DESPLAZAMIENTO INTERNO

Según un estudio¹, en el periodo 2000/01 existían en el país 645.774 migrantes internos, lo que representa el 11% de la población nacional, y convierte a Paraguay en uno de los países con mayor movilidad espacial de su población. La causa está dada principalmente por razones de expulsión, para no decir que es la única. Los departamentos que sufren mayor migración rural-urbana son los de Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú, San Pedro, Guairá, Caazapá y Canindeyú. Las familias campesinas de estos lugares se ven obligadas a vender sus tierras, especialmente a los productores de soja (brasileños), que pagan al contado y luego arrasan con todo lo que encuentran: plantaciones de autoconsumo, pasturas, bosques.

Según datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Dgeec), aproximadamente 100 mil personas por año dejan el campo para ir a vivir a algún otro lugar, ya sea en ciudades o en otras áreas rurales. El éxodo rural-urbano es una problemática actual, constituyéndose en una de las grandes preocupaciones de las organizaciones campesinas. Este fenómeno es consecuencia de la invasión de agricultores de soja (casi exclusivamente transgénica) en el país, especialmente de nacionalidad brasileña que según Fogel² desplaza no sólo a familias campesinas, sino a otros grupos de la cúpula de la estructura de poder y en vez de integrarse al país, lo colonizan.

Por otro lado, gran cantidad de familias no posee un pedazo de tierra para cultivo o si lo tiene, es muy pequeño y deteriorado. Tal es así que de cada 10 hogares con propiedades de dos a 20 hectáreas, alrededor de seis están en la pobreza. Un total de 29,7% de la población rural no cuenta con tierra en Paraguay y el 10%, concentra el 66,4% del total de las tierras³.

Según el Servicio Pastoral de los Migrantes, se desplazan campesinos con poca tierra y que no tienen recursos para sostener la reproducción de la unidad campesina, como también los arrendatarios⁴. El Censo 2002 nos muestra que los departamentos que más movimiento migratorio interno registraron en estos últimos años son Caaguazú, con más

¹ Estigarribia, Lucía. "El ALCA y sus consecuencias para la economía campesina paraguaya". Artículo publicado en "EL ALCA y sus peligros para América Latina". Colección Campus Virtual. CLACSO. Buenos Aires, 2005.

² Fogel, Ramón. — "Estructura social y procesos políticos". Asunción, 2005.

³ Ottmar, Hahn. "Paraguay. La necesidad de un desarrollo rural sostenible para el desarrollo humano de los agricultores familiares campesinos". Foro sobre Acuerdos Interregionales y el Desafío Campesino. IICA-MAG. Asunción, 2003.

⁴ Servicio Pastoral de los Migrantes. "Migrantes brasileños en Paraguay. Principales problemas y demandas". Asunción, 1994.

de 33.000 personas, y Alto Paraná, con más de 34.500⁵. Esto obedece, por un lado, al avance del cultivo de la soja y, por otro, a la pobreza imperante; esto seguirá agravándose enormemente, pues el Estado no cuenta con una política económica y de arraigo campesino.

Movimiento migratorio interno registrado en los departamentos con mayor extensión de cultivos de soja.

Departamentos	Residencia hace 5 años	Residencia actual	Migración registrada
Alto Paraná	468.308	433.641	34.667
Caaguazú	389.471	356.152	33.319
Caazapá	126.480	115.199	11.281
Canindeyú	112.586	103.836	8.750
Guairá	159.751	149.245	10.506
Itapúa	395.024	376.655	18.369
Total	1.651.620	1.534.728	116.892

Fuente: Dgeec. Censo Nacional de Población y Viviendas 2002.

Este sistema multiplica considerablemente el éxodo poblacional y ayuda a la concentración de la tierra, dando paso a una agricultura industrial de gran escala, concentración de tierra en manos de grandes empresas monopólicas exportadoras y agricultores mecanizados, que desplazan sin más a gran cantidad de familias campesinas.

Algunas de estas empresas (Monsanto, Cargill, Syngenta, Dreyfus, Bunge & Born) son parte de las 500 empresas más grandes del mundo, que controlan el 25% de los productos mundiales, 300 corporaciones son dueñas del 25% de los activos mundiales, y 50 controlan el 60% del capital global. Una forma de medir el poder de estas transnacionales es compararlas con los productos brutos nacionales de naciones enteras. En 1995, 48 de las 100 mayores economías del mundo eran corporaciones, no países⁶.

TRATA DE PERSONAS Y LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL

El gobierno paraguayo, a iniciativas de la Cancillería y con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), inició durante el año 2004 una serie de actividades tendientes a encarar este

⁵ Ambos departamentos, junto a Itapúa, son los mayores productores de soja transgénica en el país.

⁶ Tomado del sitio web www.aseed.net/agrocadabra/soy-es-intro.htm

difícil problema. La conformación de grupos de trabajo especializados fue el resultado de una serie de hechos que han venido saliendo a la luz con frecuencia y que se vinculan a la aprobación por parte de Paraguay de la Convención de Naciones Unidas que tiene por objetivo prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres, niñas y niños, según acuerdo adoptado en Nueva York el 15 de noviembre de 2000.

Asimismo, los gobiernos de Paraguay y Estados Unidos acordaron establecer y apoyar un proyecto destinado a mejorar la capacidad institucional del gobierno paraguayo para implementar medidas efectivas contra el crimen transnacional y organizado, incluyendo la trata de personas.

En este orden, fue inaugurado en Asunción el **Centro de Referencias en tema Trata de Personas**. Esta oficina es dependiente de la Secretaría de la Mujer, que se encargará de los registros y acompañará los casos de tratas de personas; además ofrecerá capacitación a los agentes institucionales y comunitarios sobre combate a este hecho criminal. El centro igualmente será encargado de dar seguimiento a los casos, recibirá denuncias de todo tipo de violencia contra la mujer.

La Secretaría de la Mujer, siguiendo con las actividades de combate a la trata de personas, puso en marcha una campaña de sensibilización y educación a la población con el objeto de frenar este flagelo. La campaña incluirá información útil sobre los lugares donde se pueden realizar denuncias ante la sospecha de aparición de posibles reclutadores. La iniciativa se inicia como respuesta a la existencia de varios casos, especialmente mujeres, niños, niñas que cayeron en la prostitución bajo engaño por parte de reclutadores.

Por otro lado, la Dirección de Planificación Política del Ministerio de Relaciones Exteriores – Coordinación de la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas, el 21, 22 y 24 de noviembre del corriente en un taller convocado por estas instituciones, realizó su planificación estratégica para el fortalecimiento institucional de la mesa para asegurar y planificar actividades futuras referentes a la prevención y combate a la trata de personas. Cabe destacar que la mesa apunta principalmente su trabajo a casos de mujeres, adolescentes, niñas y niños víctimas de trata.

La trata de personas es el tercer negocio ilícito más grande del mundo, luego del tráfico de drogas y armas, que prácticamente van relacionadas, por ello, con un programa piloto regional que intentará reducir este delito. El programa se ejecutará en Colombia, El Salvador, Bolivia y Paraguay y asciende a unos 200 mil dólares, de los cuales el

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donará US\$ 150.000, la OIM aportará US\$ 25 mil y otros US\$ 25 mil los despachos de las primeras damas de los países involucrados. El proyecto consiste en capacitación a educadores y sensibilización a través de obras de teatro. En el caso paraguayo se tendría que analizar el público que accedería al teatro, pues no tenemos una cultura al respecto.

CASOS DE TRATA DE PERSONAS

El número de casos de niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de este hecho ha aumentado drásticamente en los últimos años. En el año 2000, hubo 11 casos, con 70 mujeres víctimas; en el 2001, seis casos, con 16 mujeres; en el 2002, ocho casos, con 42 mujeres; mientras que en el 2003, 29 casos, con 109 mujeres involucradas; y en el 2004, 61 casos, con 236 mujeres. Ello equivale a un total de 115 casos registrados, con un total de 473 mujeres víctimas en un período de cinco años.

En marzo de este año (2005) fueron rescatadas dos mujeres paraguayas por parte de la Policía española, específicamente la Guardia Civil de ese país. Durante el procedimiento fue detenido el encargado del club de la localidad madrileña de Navas del Rey, que mantenía retenidas a las compatriotas. Los agentes inspeccionaron el club constatando la presencia de las dos paraguayas, quienes se encontraban en el lugar en contra de su voluntad. Fue arrestado el propietario de 37 años, acusado de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otro de detención ilegal.

Por otro lado, en el vecino país de Argentina, en un procedimiento realizado por la Policía Federal en colaboración con la ministra de la Secretaría de Desarrollo para Repatriados, Connacionales y Refugiados y el embajador paraguayo ante el gobierno argentino, se rescató a 36 mujeres paraguayas, quienes bajo engaños fueron llevadas a ese país para forzarlas a ejercer la prostitución. Autoridades paraguayas gestionaron sus retornos a nuestro país. La intervención fue encabezada por la fiscal Eve Flores, de Córdoba, Argentina. En el caso aparece involucrado un sargento primero de la Policía que tiene sus contactos en Paraguay.

En mayo fueron detenidos dos ciudadanos suecos –Gergman Lars Arne Christer, de 56 años, y Ksell Andres Coran, de 49 años– por la producción y traslado de material con pornografía infantil. Luego de prestar declaración indagatoria fueron puestos en libertad, lo que evidencia la facilidad de extender las redes de la prostitución infantil en nuestro país. Estas personas, incluso, tenían la intención de formar un albergue para niños de la calle o de otras familias necesitadas, que utiliza-

rían como fachada para sus objetivos reales. En su poder se encontró gran cantidad de material ilícito, que producían en el hotel en el que estaban hospedados. Las autoridades están investigando para dar con el contacto paraguayo que les facilitó las informaciones necesarias para la producción de dichos materiales.

SITUACIÓN EN LA FRONTERA

Ciudad del Este – Foz de Yguazú

El conflicto generado en esta zona se originó a partir de la decisión de Brasil de legalizar el comercio fronterizo, eliminar el contrabando y la piratería. Esta es la base para buscar la solución al conflicto existente en la zona. Esto se desprende del resumen de las conversaciones y decisiones de la reunión bilateral Paraguay–Brasil. Los comités de frontera serán reactivados para que sean foros de consultas sobre los problemas comunes.

La consecuencia del conflicto reduce la recaudación del Estado paraguayo, que desde que se inició la crisis dejó de percibir unos 70.000 millones de guaraníes y la cifra tiende a aumentar.

Varias opiniones surgen a partir de este hecho. El asesor económico de la Presidencia de la República, Carlos Walde, dijo que, al imponer fuertes restricciones al comercio fronterizo con Ciudad del Este, el gobierno brasileño no hace más que utilizar a esta como “un chivo expiatorio” en su afán de obtener próximamente la certificación de Estados Unidos que, de lograrlo, le redituará en ventajas arancelarias para sus exportaciones. Por otro lado, la viceministra de Comercio, Dra. Mirian Segovia, ve dos escenarios bien identificados en la búsqueda de soluciones para el conflicto en Ciudad del Este–Foz de Yguazú. Por un lado, incentivar las negociaciones bilaterales y, por otro, combatir la ilegalidad por parte de Paraguay en las líneas fronterizas permeables con Brasil.

Uno de los temas controvertidos es el cupo de compras que se pueden realizar en Ciudad del Este. En ese sentido, se espera respuesta de Brasil al pedido realizado por el gobierno paraguayo de aumentar el cupo de compras de US\$ 150 a 500. Mientras, el Brasil espera la decisión de la oficina de comercio de los Estados Unidos de incluir a este país en la lista negra por su opaca gestión en la lucha contra la piratería. Trabajadores brasileños también exigen el fin de los controles paraguayos a los trabajadores extranjeros en Ciudad del Este.

A fines del mes de marzo de 2005, el gobierno paraguayo realizó el pedido de aumento de cupo para compras de US\$ 150 a 500. Dicho

pedido no corrió en las negociaciones realizadas, ya que Brasil solamente acepta hasta US\$ 200, como tampoco quiere dejar de ser estricto con los controles que se realizan en Foz de Yguazú. La decisión del vecino país obligó a Paraguay a realizar una contrapropuesta. Finalmente, Brasil aceptó el aumento de compras por valor de US\$ 300, sin embargo impuso severas condiciones. Si bien no resuelve el problema, según indicó el intendente de Ciudad del Este, Javier Zacarías Irún, es el primer paso de una serie de medidas que irán adaptándose en forma escalonada y cuidando que los conciudadanos/as no pierdan sus fuentes de trabajo.

Por otro lado, con toda rigurosidad continúa en Foz de Yguazú el cerco brasileño impuesto a los compatriotas que llevan mercaderías del microcentro local. Igualmente, el control al lado paraguayo sigue para detectar productos falsificados o que hayan evadido impuestos.

Tras la decisión del cupo de compras por US\$ 300, se reactivó el comercio en Ciudad del Este. Aproximadamente entre 1.500 a 2.000 brasileños cruzan diariamente el puente para trabajar en casas comerciales en Ciudad del Este. Mientras, los trabajadores anuncian movilizaciones en protesta por los excesivos controles que se realizan en ambos márgenes del río Paraná, alegando que los controles no son más que para pedir coimas.

Grande fue la sorpresa para las autoridades nacionales, después de haber acordado el cupo de compras de US\$ 300 en Ciudad del Este, cuando se enteraron que Brasil a partir del 15 de abril anunció un control reforzado en la frontera y postergó el cupo de compras que fue resuelto en una reunión bilateral entre ambos países. El intendente de Ciudad del Este, Zacarías Irún, calificó la postura brasilera como una “bofetada para el Paraguay” al emitir un comunicado oficial a las autoridades nacionales. Ante estas declaraciones, Brasil prometió elevar el cupo de compras para el 20 de abril.

En este mismo orden, el diputado liberal Oscar González fue detenido y expulsado de Foz de Yguazú: la Receita Federal lo detuvo por una hora en la cabecera del Puente de la Amistad, del lado brasileño, junto con un periodista de radio La Voz de la Libertad. El confuso hecho ocurrió cuando estaban realizando un recorrido por la frontera para verificar los abusos que se estaban cometiendo contra paraguayos en la frontera, según denuncias recibidas.

Por otro lado, el intendente de Foz, Paulo Mc Donald, convocó a una audiencia pública al gobernador del Alto Paraná, Gustavo Cardozo. Según la nota de carácter urgente, el gobernador deberá dar un informe sobre la supuesta persecución a brasileños en Paraguay. Dicha audiencia pública se llevará a cabo en Foz de Yguazú, Brasil, aunque

autoridades de ese organismo niegan que dicha reunión esté agendada. Además, deberán declarar los representantes de los trabajadores y comerciantes brasileños que mantienen actividades en Paraguay y el intendente de Foz de Yguazú.

Una encuesta realizada por el municipio de Foz de Yguazú revela que unos 108 mil brasileños están ligados directamente al comercio entre Ciudad del este y Foz, y el tráfico de mercaderías en la mayoría de los casos es en forma ilegal, lo cual es el soporte de miles de familias brasileñas. Todas estas personas quedaron sin trabajo a partir del bloqueo, y no están de acuerdo con los controles ejercidos por Migraciones tanto en el puente como en los comercios. Ya fueron deportados unos 451 brasileños, y están sumariadas 300 empresas locales que contrataron mano de obra ilegal.

A raíz de esta serie de expulsiones realizadas por la Dirección General de Migraciones, Brasil pidió suspender las expulsiones de los brasileños a través del intendente de Foz, manifestando que la expulsión de trabajadores ilegales de Ciudad del Este no debería darse *entre "ciudades solidarias"*. Además, pidió el cambio de la ley migratoria paraguaya, durante una reunión mantenida con autoridades departamentales, representantes de aduanas, Fiscalía, Migraciones, Policía Nacional y otras. **Manifestó que 2.000 brasileños que trabajan en Paraguay no perjudican al país, pero 2.000 desempleados dañan mucho a Foz de Yguazú.**

Es importante mencionar que la expulsión de los brasileños de Ciudad del Este no solo perjudica o deja sin puestos de trabajo a los inmigrantes, sino también que los paraguayos están perdiendo sus fuentes de trabajos con la reducción de los costos de los comercios locales y el cierre de muchos de los negocios. El control de Migraciones obligó a algunos brasileños a no acudir a los locales. Según algunos desempleados, con esto no se están recuperando fuentes de trabajo.

A pesar de que se busquen dar soluciones a la situación en la frontera, Brasil sigue recrudesciendo sus controles en la frontera con fuerzas policiales y militares en el río Paraná, frente a las costas paraguayas, en la zona de la capital de Alto Paraná. A pesar de los controles, no paran el tráfico ilegal de cigarrillos y de otros productos. Por otro lado, anuncian en breve una megaoperación (por aire, agua y tierra) de los tres organismos federales del Brasil en la frontera con Paraguay. El objetivo es eliminar las actividades ilegales –como el contrabando, la piratería, el tráfico de armas y de drogas. Para el trabajo, los organismos de seguridad del Brasil están contando con el apoyo de las autoridades estadounidenses a fin de dar cumplimiento a un acuerdo firmado el 21 de enero pasado en Brasilia.

Como resultado de los fuertes controles en la frontera, alrededor de 350 paraguayos, entre trabajadores del volante y familiares, fueron detenidos en el control del vecino país, y pidieron la mediación de concejales departamentales ante la consulesa paraguaya en Foz de Yguazú, Alejandrina Vallejos. La mayoría fue detenida por contrabando desde que se inició el operativo de control en las fronteras, y denunciaron que la institución diplomática no les brinda ningún tipo de ayuda.

COMPATRIOTAS EN LA FRONTERA CON ARGENTINA

La deficiencia en las atenciones, la falta de infraestructura y de insumos en los hospitales, centros y puestos de salud de nuestro país, inducen a que ciudadanos/as paraguayos recurran a hospitales de los países vecinos para ser atendidos. Este es el caso de los pobladores de Pilar, que recurren al hospital público de Resistencia, Argentina, para ser atendidos gratuitamente. Los pilarenses recorren unos 140 kilómetros –de los cuales 40 son de tierra– para llegar al lugar, y si llega a llover y se cierra el camino, éstos quedan a su suerte, ya que se dificulta el paso por ser una ruta terraplenada.

Por otro lado, el consulado paraguayo en Resistencia busca reducir la cantidad de paraguayos indocumentados en la zona, que oscilaría entre 200 y 300 compatriotas y que a veces ni siquiera tiene documentos paraguayos. Para ello está trabajando con la embajada en Argentina.

LEY DE SEGURIDAD FRONTERIZA

La Ley de Seguridad Fronteriza genera temor e incertidumbre entre los inmigrantes brasileños asentados en la región de Canindeyú, señaló el titular de la Asociación Rural del Paraguay – regional Canindeyú, Celito José Cobalchini, quien solicitó al gobierno que se haga una buena reglamentación de la ley y su implementación sea cuidadosamente controlada.

Por su parte, el presidente Nicanor Duarte frutos prometió que se reglamentará dicha ley para garantizar el trabajo de los extranjeros en el país, con lo que esta gente visualiza mejorías a su situación, principalmente quienes se dedican a la agricultura en la frontera de nuestro país, cultivando grandes extensiones de soja, arroz y otros productos.

La Ley de Seguridad Fronteriza ya está promulgada por el Ejecutivo y fue sometida a una modificación por el Senado. Actualmente está en estudio en la Cámara de Diputados.

SITUACIÓN DE TURISTAS

Los transportistas, la Dirección de Turismo y la Dirección General de Migraciones buscan solucionar problemas de documentación en las fronteras. Durante una reunión informativa, los transportistas solicitaron buscar una solución a los numerosos problemas que enfrentan los turistas por parte de instituciones oficiales como Policía, Migraciones, Automotores, etc., a la hora de verificación de los documentos. Según se refieren, es un verdadero "asalto" a los bolsillos de los turistas. Con respecto al pedido, el director de la Dirección General de Migraciones, Carlos Liseras, dijo que en breve se utilizarán unos modernos controles de documentación de personas en todos los puntos de entrada y salida del país, mediante una donación del gobierno de Corea. El sistema detectará las huellas dactilares, así como también imagen y lector de documentación de pasaporte, cédula de identidad, y a la vez estará interconectado con la base de datos de la Oficina Central de Migraciones, de Interpol y la Fiscalía.

Podríamos decir que este emprendimiento de la Dirección General de Migraciones de nuestro país es un paso hacia el proyecto "Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana" (Iirsa). El mecanismo de control comenzará a implementarse en la frontera paraguayó-argentina durante los meses de octubre, noviembre, según el director de Migraciones, Carlos Liseras, con métodos diferentes de ambos países. Por todo ello se cree que esto ocasionará una gran aglomeración de personas, ya que de a uno deben pasar por las máquinas, que sirven para obtener huellas dactilares y el iris del ojo en una toma fotográfica. Mientras, del lado argentino se cuenta con el sistema "Sicam", que son equipos que trabajan como un scanner, adquiriendo la información necesaria en cuestión de segundos, con solo pasar el pasaporte o cédula por un lector óptico.

IMPUESTOS AL TURISMO

Desde el 1 de noviembre del corriente entró a regir los nuevos impuestos al turismo, según el Decreto N° 6.406 (norma impositiva para productos destinados a la venta a turistas), a pesar de críticas y oposición de los gremios. La normativa tendrá una vigencia de dos meses y sin puntos a modificar, según autoridades nacionales.

Nuevo régimen tributario de turismo en Ciudad del Este

Reducción de aranceles para productos informáticos

Antes: 2% Ahora: 0%

A la reducción se suma la declaración de los valores factura.

Carga tributaria

- Electrónica.
- Perfumes, maquillajes
- Licores.
- Artículos de juguetería, entre otros.

Además del arancel externo del 20%, se obligará al pago del 1,5% en concepto de Impuesto a Valor Agregado (IVA) sobre la base imponible de despacho en la Aduana, más el 10% del mismo impuesto sobre el precio de venta final.

Fuente: Subsecretaría de Tributación del Ministerio de Hacienda.

Este nuevo régimen tributario tiene efectos positivos como negativos, ya que la reducción de aranceles a productos informáticos incrementará la venta del tal producto, mientras la carga de aranceles a otros productos reducirá la demanda, lo cual desembocaría a una emigración de importadores a otras ciudades. Como forma de buscar una solución a este tema el presidente de la república y el intendente de Ciudad del Este acordaron la creación de una comisión integrada por representantes de la gobernación, la municipalidad local, comerciantes, importadores, despachantes de aduana y contadores, quienes se encargarán de generar nuevas propuestas de solución al comercio de la zona.

Hasta noviembre de 2005 el gobierno paraguayo no había dado solución al nuevo régimen de turismo –que elevó el precio de los artículos importados–, por lo que trabajadores de Ciudad del Este cerraron el acceso al Puente de la Amistad como forma de protesta, además por los estrictos controles de autoridades brasileñas en la zona fronteriza para evitar el ingreso de contrabando, en el marco de la operación “Frontera blindada”. Los dirigentes de los diferentes gremios anunciaron que si sus reclamos no son atendidos, cerrarán en forma permanente el Puente de la Amistad. Recordemos que los conflictos tributarios en Ciudad del Este se repiten cada año, por lo que es necesario que el gobierno paraguayo tome en serio esta situación y reglamente las leyes existentes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Apoyar presupuestaria y políticamente la reforma agraria para dotar de tierra y de infraestructura social y productiva adecuada a no menos de 100 mil familias campesinas que se encuentran en situación de pobreza extrema o a punto de entrar en ella.
- La situación de los migrantes brasileños residentes en las áreas rurales, principalmente de los departamentos fronterizos con ese país, debe ser encarada de manera más seria por las autoridades migratorias y diplomáticas del país, y buscar soluciones respetuosas de los derechos humanos y en concordancia con la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
- Lo mismo se aplica a la situación de los trabajadores brasileños que diariamente cruzan la frontera entre Foz de Iguazú y Ciudad de Este, que continúa totalmente irregular. Tanto el Ministerio de Justicia como la Dirección Nacional de Migraciones deberían estudiar las formas de “blanqueo” de estos casi 6.000 migrantes diarios a fin de evitar los abusos patronales, la evasión de tributación laboral, y las protestas de los trabajadores paraguayos sindicalizados, que ven con preocupación esta migración, ya que les resta puestos de trabajo.
- Modernización de la Dirección General de Migraciones para poder cumplir con cabalidad con sus objetivos. De hecho, como parte de su modernización, debiera figurar la redefinición de su rol ante la creciente complejidad de la problemática migratoria.
- En cuanto a la migración interna, sigue sin definirse una política poblacional para el país. Ni siquiera existe un órgano consultivo, como tienen otros países latinoamericanos, que pueda elaborar criterios para la atención de los crecientes problemas poblacionales y migratorios del país.

Derechos de las personas con discapacidad: Otra década perdida

Julio César Fretes, Zulma Ferreira, Claudia Pacheco y Marta Codas
Coordinadora Nacional por la Promoción de los
Derechos de las Personas con Discapacidad
(Conaprodis)¹

La situación de las personas con discapacidad, desde el punto de vista del respeto de sus derechos humanos, sigue siendo tan lamentable como hace 10 años debido principalmente a la falta de políticas públicas que orienten la gestión del Estado, la ausencia e insuficiencia de instituciones orientadoras en la definición de las prioridades y en la aplicación de los escasos recursos, así como por el incumplimiento reiterado de las disposiciones legales existentes, por citar algunos de los elementos de mayor incidencia en la violación de los derechos elementales de las personas con discapacidad.

¹ El presente informe fue elaborado por la Conaprodis bajo la perspectiva de la década transcurrida desde que la CODEHUPY iniciara el primer informe anual "Derechos Humanos en Paraguay", en el año 1996.

Este breve diagnóstico adquiere niveles alarmantes si consideramos que el Estado paraguayo, y por ende los gobernantes, conocen la situación actual por los numerosos documentos de análisis que se han generado tanto desde el sector público como privado, también conocen las acciones que deben ejecutarse de acuerdo, entre otros, al Plan de Desarrollo Económico con Equidad Social (San Bernardino, 2004), y también conocen las metas que deben alcanzarse, entre otros los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por lo que no existen justificativos tan siquiera para atenuar el hecho de que los problemas derivados de la discapacidad sigan ausentes de la agenda pública, marginando y excluyendo del goce y disfrute de sus derechos humanos a más de 500.000 ciudadanos en situación de desventaja debido a la discapacidad.

Es aquí interesante recuperar la percepción de Bengt Lindqvist, relator especial de las Naciones Unidas sobre discapacidad, quien plantea: *“si yo, después de trabajar 30 años en el área de la discapacidad, tuviera que elegir una palabra para describir esta situación, me quedaría con la palabra ‘exclusión’. Millones y millones de personas con discapacidad de los países en desarrollo carecen de acceso a la educación; viven en precarias condiciones de salud; son golpeadas por la pobreza y se las aísla socialmente. Es bien conocida la estrecha relación existente entre discapacidad y pobreza: la discapacidad conduce a la pobreza y la pobreza a la discapacidad²”. Creemos que esto refleja claramente la situación de la discapacidad en nuestro país.*

MARCO NORMATIVO: ¿CUÁNTO HEMOS AVANZADO?

Evolución legislativa de los últimos 10 años

La década que analizamos no ha sido pródiga en novedades legislativas, y se espera que la década que se inicia sea diferente en su ejecución y cumplimiento. Más que la cantidad de leyes, importa la calidad y principalmente su cumplimiento efectivo.

En el año 1998 se promulga la Ley N° 1.264 General de Educación, que establece importantes disposiciones con relación a las necesidades educativas especiales.

² Lorenzo García, Rafael. “El futuro de las personas con discapacidad en el mundo”, pág. 60.

En el año 2002, Paraguay promulga la Ley Nº 1.925 por la que ratifica la Convención Interamericana para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra las Personas con Discapacidad³.

También ese mismo año se promulga la Ley Nº 1.885/02 de las personas de la tercera edad, es decir, mayores de sesenta años (art. 1) que establece disposiciones específicas a favor de las personas de la tercera edad con algún tipo de discapacidad, donde se menciona en el artículo 11 que el *“Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, los gobiernos departamentales y municipalidades del país deberán promover la eliminación de las barreras arquitectónicas, para que las personas ancianas, especialmente las que sufren de discapacidades físicas, puedan movilizarse sin dificultad. Asimismo, arbitrarán los medios para la habilitación de transportes públicos con instalaciones especiales, a los mismos efectos”*⁴. Esta ley todavía no está reglamentada.

PROYECTOS LEGISLATIVOS PRESENTADOS

En el año 1996 las organizaciones de personas con discapacidad presentaron ante el Congreso Nacional un proyecto de ley de creación del Consejo Nacional de la Discapacidad (Conadi), dependiente del Poder Ejecutivo, con la intención de crear un órgano rector de las políticas públicas en materia de discapacidad. En el año 1994 ya se había presentado un proyecto similar.

También en el año 1996 la Dirección y el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Protección a las Personas Excepcionales (Inpro, Ley Nº 780/79) presentaron ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley de creación del Instituto Nacional de Prevención de la Discapacidad y de Rehabilitación e Integración de las Personas con Discapacidad. Este proyecto pretendió que el Inpro pasara a depender directamente del Poder Ejecutivo y no del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), como sigue dependiendo en la actualidad, además de ampliar los objetivos de la institución. Esto también quedó sin efecto unos años después.

En el campo de la atención a personas con trastornos mentales, en el año 1998 la Cámara de Diputados aprueba la ley conocida con el nombre de Ley de Salud Mental, que pretendió un abordaje más humano y fundado en los derechos de las personas con discapacidad mental, así como la promoción de la salud mental de todos los habi-

³ Adoptada en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 7 de junio de 1999, en el vigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Véase <http://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos8a.htm>

⁴ Véase http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/2002/leyes/ley_1885_02.htm

tantes del país. Este proyecto fue rechazado posteriormente por la Cámara de Senadores.

Ya en la nueva década, el avance más significativo registrado durante el periodo 2004/2005 es la Ley Nº 2.479/04, que establece la reserva de empleos públicos en favor de las personas con discapacidad. Fue promulgada en octubre de 2004 pero su aplicación práctica está demorada pues, hasta la fecha de elaboración de este informe, aún no se encuentra reglamentada.

Con esta ley sucede lo mismo que con tantas otras leyes sancionadas y promulgadas que, al no estar reglamentadas, sirven solamente para engrosar los archivos legislativos. Así sucede también con la Ley Nº 1.925/02, que ratifica la Convención Interamericana para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y la Ley Nº 122/90, que establece privilegios a favor de las personas con discapacidad.

La Ley Nº 2.479/04 de reserva de empleos públicos dispone que la administración pública central y descentralizada, así como los municipios y gobernaciones que cuenten con más de 50 empleados en su nómina, deberán reservar el 2% de los puestos públicos para que sean ocupados por personas con discapacidad. Con esto se pretende, por una parte, establecer una medida de discriminación positiva a favor del colectivo al que va dirigido y, por otra, disponer una medida paliativa del altísimo índice de desocupación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, cuyos indicadores tampoco existen.

La Secretaría de la Función Pública, dependencia del Poder Ejecutivo con rango ministerial, es la responsable de la aplicación de dicha ley, y durante noviembre y diciembre de 2004 realizó una serie de conferencias de difusión de la ley dirigidas a los directores y jefes de Recursos Humanos de la administración central. En enero de 2005 algunos representantes de las organizaciones de personas con discapacidad presentaron a consideración de dicha secretaría de Estado un proyecto de reglamentación de la citada ley, pero coincidió con la sustitución del titular de la dependencia y una vez más se cumplió la perversa ley no escrita de la administración pública paraguaya: la falta de continuidad de los planes, Programas y compromisos por cambios en la titularidad de los entes e instituciones públicas.

De todas maneras, algunas organizaciones de personas con discapacidad valiéndose de la ley están consiguiendo la colocación de algunos de sus representados en las instituciones públicas, ya sea exigiendo su cumplimiento o por vínculos políticos, pero en ningún caso como consecuencia del cumplimiento sistemático, documentado y ordenado de la ley.

Desgraciadamente, el Sistema Nacional de Formación Profesional – impulsado por el Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)– no incluye capítulos específicos para las personas con discapacidad. Esto hace que peligre esta iniciativa de oportunidad laboral, pues este colectivo de personas se caracteriza por un bajo nivel de formación académica y poca o ninguna preparación profesional, por lo que la ley por sí sola no resolverá ni siquiera parcialmente la vulneración del derecho al trabajo de las personas con discapacidad.

PROYECTOS LEGISLATIVOS EN CARPETA

- *“Ley antidiscriminación”*: con este nombre se conoce públicamente a un proyecto de ley presentado por el senador Carlos Filizzola y cuya finalidad más importante radica en elevar a la categoría de hecho punible los actos y situaciones de discriminación contra los grupos más vulnerables de la sociedad, entre los que se encuentran las personas con discapacidad.
- Paralelamente surge –dentro de la iniciativa del Centro de Documentación y Estudios con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa)– una iniciativa bastante innovadora donde se busca con una ley única responder a la eliminación de todas las formas de discriminación, donde también se ve contemplada la problemática de las personas con discapacidad.

Estas dos propuestas se encuentran hace más de un año en estudio y en revisión a partir de una serie de consultas regionales y a los gremios de personas que trabajan en la promoción de los derechos.

- *Proyecto de ley de aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a la educación*: impulsado por la organización Paideia y apoyado por una treintena de organizaciones no gubernamentales, pretende una política para la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación nacional con ventajas significativas para los estudiantes y docentes en general, y para los niños y niñas con discapacidad en particular.

ACCIONES DESDE EL SECTOR PÚBLICO

A continuación se menciona algunas acciones del sector público en los últimos 10 años.

- La Municipalidad de Asunción ha implementado a partir de 1993 el «Programa de inserción laboral», mediante el cual algunos jóvenes han podido acceder a un trabajo remunerado. Este programa en realidad se creó como un espacio de formación en el trabajo, con miras a proveer una alternativa de capacitación en servicio. Sin embargo, a la fecha han sido incorporados a las diversas dependencias municipales más de 20 jóvenes con discapacidad mental como funcionarios, perdiéndose, así la meta inicial del proyecto.

Además, y en la misma administración comunal, la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Asunción ha desarrollado programas de prevención de la discapacidad en los barrios ubicados en zonas de riesgo. Se han eliminado barreras arquitectónicas y equipadas plazas para niños y niñas con impedimentos. Sin embargo, estas acciones no han tenido sostenibilidad ni continuidad, por lo que devienen en esfuerzos aislados casi anecdóticos.

- En el año 1998 el Departamento de Educación Especial y el Inpro establecieron talleres protegidos y de formación para el trabajo para escasas personas, aunque su enfoque y abordaje en general es poco productivo, propiciando muchas veces más segregación y estigmatización de las personas con discapacidad como potenciales empleados en espacios inclusivos.
- La Dirección de Educación Especial ha emprendido acciones –en consonancia con los grandes cambios que se están generando en los países de la región– denominadas Foros Regionales de Educación Especial – Desafíos para el siglo XXI. Estos encuentros se realizaron en Villa Hayes y los departamentos Central, Cordillera, Paraguarí, Itapúa, San Pedro y Alto Paraná. Los objetivos de los foros son fundamentalmente acercar a las comunidades las nuevas propuestas sobre la educación especial como recurso de la educación regular, las alternativas innovadoras de la educación para la diversidad y el apoyo de esta dirección a los proyectos locales de educación para las personas con necesidades educativas diferentes
- También el año 1998, por Resolución Nº 432, se creó el Instituto Nacional de Salud Mental (Insame) *“considerando que el análisis del devenir histórico de la atención psiquiátrica y psicosocial de-*

*muestra la necesidad de un cambio sustancial en cuanto al marco legal, técnico y operativo, para revertir la atomización de los recursos disponibles en el área, la centralización de sus programas y servicios, la deficiente capacidad de respuesta a la demanda, especialmente en el interior del país*⁵.

- En el año 2002, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de la Dirección de Bienestar Social, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), convocó a representantes de instituciones de y para personas con discapacidad con el fin de elaborar un plan de desarrollo de intervención integral en discapacidad. Como objetivo establece que la sociedad paraguaya trabaje para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y su propósito es contribuir al análisis e intervención integral en la problemática de la persona con discapacidad. Con el propósito de hacer propuestas efectivas y viables, se conformaron grupos de trabajo por área específica. Posteriormente se mantuvieron reuniones para priorizar acciones.
- La Dirección de Bienestar Social, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con el apoyo del Real Patronato de Discapacidad de España, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Asociación de Municipalidades del Área Metropolitana (Amuam), realizó los días 21 y 22 de julio de 2003 un taller para tratar el tema de eliminación de barreras arquitectónicas y físicas, cuyo abordaje fue urbanístico, de viviendas individuales, servicios de transporte público de pasajeros, centros comerciales, estadios, cines y para que todo tipo de local de uso público cuente con infraestructura y servicios accesibles para todas las personas, dirigido a los funcionarios municipales, decanos de universidades, dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, etc.

ACCIONES DE ESTE ÚLTIMO AÑO

Durante el periodo correspondiente a agosto del año 2004 y agosto del año 2005 no se puede asegurar que se hayan registrado acciones significativas de parte del sector público con relación a la situación de los derechos de las personas con discapacidad.

Muchas iniciativas con la participación de las organizaciones de la sociedad civil se han iniciado, pero han quedado truncadas a lo largo del año por cuestiones ajenas a ellas: cambios políticos, falta de presupuesto, entre otras. Esto demuestra una vez más que lamentablemente los temas relacionados con la discapacidad siguen fuera de la

⁵ Resolución N° 432/98 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

agenda pública del gobierno actual. No se avizoran indicios de que puedan producirse cambios en el futuro inmediato.

La única iniciativa se registró desde la Secretaría Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (SNNA) que, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, se elaboró un proyecto de "Plan de asistencia integral a niños y niñas con discapacidad", cuyo borrador final fue presentado a la titular de dicha cartera en julio de 2005. Por desgracia, acá también se cumplió una vez más la perversa ley no escrita de la administración pública, ya que en agosto de 2005 la titular de dicha secretaría de Estado fue reemplazada en el cargo y habrá que esperar que la nueva titular decida la continuidad de la aprobación y ejecución del mencionado plan.

Hasta agosto del año 2004 y especialmente después de la tragedia del 1 de agosto de 2004 con el incendio del supermercado Ycuá Bolaños, el Instituto de Bienestar Social (IBS), dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, venía impulsando el Programa de Rehabilitación con Base Comunitaria, patrocinado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), habiéndose realizado a través de la Comisión Nacional de Rehabilitación con Base Comunitaria, integrada por personas representantes de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, cursos de capacitación en diagnóstico y orientación sobre discapacidades a grupos de voluntarios con la finalidad de llevar a cabo un relevamiento de las víctimas y familiares de la citada tragedia. Sin embargo, durante el año 2005 la Comisión de Rehabilitación con Base Comunitaria no ha sido convocada ni una sola vez, por lo que el estancamiento y la falta de acción constituyen un retroceso en los trabajos y proyectos ya iniciados. En gran medida todo esto también se debe al cambio en la titularidad del Ministerio de Salud que, a su vez, produjo cambios en la dirección del IBS.

Cabe mencionar que hasta finales del año 2004 el anterior titular del IBS se encontraba abocado en impulsar la creación de un Consejo Nacional de la Discapacidad, como consecuencia de la onda expansiva que el "Año Iberoamericano de la Discapacidad" había originado en la región y con el patrocinio de la Red Intergubernamental Interamericana de Colaboración Técnica (Riicotec).

En el sector de la educación se han registrado una serie de actividades que buscan articular la problemática de la discapacidad desde un enfoque de derechos. Sin embargo, aún no se han visto los "frutos" de dichos esfuerzos en el presente año 2005.

Algunas de estas actividades fueron las siguientes.

Desde inicios del año se han incorporado a los proyectos de alfabetización de jóvenes y adultos la problemática de las personas con discapacidad a través de un material de identificación y capacitación básicas; además, a nivel administrativo, dicho programa ya permite visualizar si existen personas con discapacidad atendidas por ese programa y qué tipo de discapacidad poseen; esto permite que se creen centros especiales que informan sobre la presencia de estudiantes con discapacidad y permiten una atención educativa más acorde a sus necesidades educacionales. Esta acción propone acciones directas dentro del marco de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio referido a la erradicación del analfabetismo en el país, algo que afecta en forma muy marcada y directa a las personas con discapacidad.

También se ha podido realizar con algunas supervisiones un trabajo más coordinado a nivel departamental sobre aspectos básicos de las diversas discapacidades a fin de no rechazar a los estudiantes en los centros educativos, lo que se considera de hecho un nivel de logro importante⁶.

En el nivel de educación inicial, en el presente año se han articulado acciones con el Departamento de Proyectos Comunitarios a partir de la producción de un material de educación especial para niños y niñas preescolares, que actualmente se encuentra en fase de impresión. Se han realizado además capacitaciones a varios centros de recursos en educación inicial buscando la incorporación de preescolares con discapacidad o en situación de riesgo.

A partir de acciones conjuntas con el área de educación no formal de la Dirección de Educación Inicial del MEC se tiene prevista la apertura de centros de atención temprana en 14 departamentos del país, con el apoyo financiero de una agencia de cooperación alemana.

En fecha 17 de junio de 2005, la Dirección de Educación Especial realizó un seminario-taller en cuyo transcurso puso a consideración de los participantes los materiales de formación del proyecto “Educar en la diversidad en los países del Mercosur”, desarrollado en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay del 2000 al 2003. Este proyecto ha sido financiado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y ha contado con el asesoramiento técnico de la Oficina Regional de Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco) para América Latina y el Caribe, Unesco/Santiago.

⁶ Entrevista realizada a Ana María Moreira, de la Dirección de Educación Especial del MEC. Se considera este aspecto como un logro teniendo en cuenta que hasta este momento los estudiantes con alguna discapacidad no eran siquiera considerados como “elegibles” en las escuelas de su comunidad.

En fecha 9 y 10 de junio de 2005 se llevó a cabo el segundo Foro Educativo Mercosur, con el lema “Por una región con equidad e inclusión”, y con el objetivo general de generar consensos en los países de la región entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la educación, buscando consolidar el capital social de la región a favor de una educación de calidad para todos.

Demás está decir que estas actividades de naturaleza más bien informativa –antes que académica o formativa– tienen el valor de ser generadoras de ideas y análisis pero no se traducen en acciones específicas que puedan medirse en términos de mejora de la calidad y de los derechos a la educación de las personas con discapacidad.

Los temas fundamentales –como por ejemplo la capacitación de los docentes mediante una carrera de profesorado o licenciatura en la atención de los estudiantes con necesidades específicas, la adecuación y adaptación arquitectónica de los locales escolares, la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la comunidad educativa, por citar algunos– están ausentes de la agenda del MEC o se encuentran accionando en forma aislada en algunas localidades, sin ningún impacto real a nivel país.

EL INPRO

El Inpro fue creado por Ley Nº 780, el 30 de noviembre de 1979, dependiente del MEC. Es el ente rector a nivel nacional en el área de la discapacidad, que tiene por objeto la rehabilitación e integración social de las personas con discapacidad.

El Inpro fue creado para toda persona que por causa congénita o adquirida padezca de disminución de su capacidad mental, sensorial o física, que afecte sus posibilidades de autosuficiencia, de aprendizaje o de trabajo, de tal modo a neutralizar las desventajas que su condición les provoca y otorgar oportunidades, mediante su propio esfuerzo, de desempeñar en su comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas sin discapacidad.

Atiende a diversos tipos de discapacidad: física o motora; auditiva y/o del lenguaje; visual; y dificultades del aprendizaje. Brinda asistencia integral de diagnóstico, prevención, atención y rehabilitación totalmente gratuita. Algunos servicios son: evaluación para admisión, clínica médica, pediatría, psiquiatría, neurología, otorrinolaringología, oftalmología, traumatología, odontología, servicios de laboratorio y radiología; prevención y estimulación temprana, psicología clínica, psicopedagogía, psicología laboral y terapia y orientación familiar. En el área de capacitación y terapia laboral funcionan actualmente 16 talleres, como pin-

tura sobre tela, serigrafía, artes en cuero, tejido a máquina, cocina, confección de silla de relajación con materiales reciclables, entre otros. También ofrece otros servicios como trabajo social, coordinación de proyectos, investigación académica, relaciones nacionales e internacionales, fonoaudiología, terapia ocupacional, farmacia social, musicoterapia, servicio de transporte, biblioteca, administración de equipos de apoyo a la rehabilitación con muletas, órtesis, prótesis, sillas de ruedas, de relajación, audífonos, anteojos, pagos de estudios especiales, internación quirúrgica, laboratorio, etc., así como médicos fisiatras, fisioterapeutas, hidroterapeutas, profesores de deportes y recreación para rehabilitación.

En el Inpro están fichadas 37.000 personas e ingresan aproximadamente 20 personas por día al departamento de evaluación para el ingreso como usuarios en la institución.

La filial Inpro I, ubicada en la ciudad de Santaní, funciona desde el año 2004.

Esta institución viene realizando algunas modificaciones para servir mejor a aquellas personas con discapacidad, quienes necesitan de sus servicios. Actualmente cuenta con un manual de funciones para mejor distribución de las tareas. También se formó un equipo dependiente de la coordinación general para analizar las diferentes funciones de las áreas de servicios existentes y planificar las tareas a ser desarrolladas, y mejorar de esa forma los servicios a los usuarios.

Sin embargo, aunque ya lleva más de 25 años de funcionamiento, se ha concentrado más en la atención médica y rehabilitación de las personas con discapacidad física o motora. Tal es así que las discapacidades sensoriales (sordera y ceguera), así como la discapacidad mental, son atendidas por otros centros de extrema precariedad. Además, la centralización de los servicios en la capital hace que la cobertura sea muy baja, ya que, de un total estimado de por lo menos 500.000 personas con discapacidad en todo el país, el total de personas fichadas en el Inpro alcanza 37.000, lo que no representa ni siquiera el 10% de la población estimada. Recién desde el año 2004 se cuenta con un servicio del Inpro en el interior del país.

Por último cabe mencionar que los recursos económicos asignados a la institución, así como la cantidad de recursos humanos disponibles, son insuficientes para mejorar la cobertura de los servicios. Asimismo, siguen prevaleciendo los criterios políticos más que los técnicos o profesionales para la designación de la dirección de la institución.

LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA CON DISCAPACIDAD DESDE SUS DERECHOS

Las acciones de la sociedad civil: fortaleciendo su incidencia

Un aspecto importante que la Conaprodis y otros miembros de la sociedad civil vienen trabajando desde hace más de dos años tiene relación con la incidencia en la problemática de la discapacidad desde un enfoque de derechos.

Así, se ha tenido en el presente año 2005 la oportunidad de participar de una consulta sobre violencia⁷ rescatando la “voz” y percepciones de la infancia y adolescencia con diversos tipos de discapacidad. Este estudio ha permitido a nuestras organizaciones y a las personas que trabajamos en ellas visualizar con más claridad aun las capacidades y potencialidades de las niñas, niños y adolescentes cuando les damos la oportunidad de participar.

Las autoridades y el gobierno han sido “evaluados” por niños, niñas y adolescentes como no protectores de ellos y ellas, sino más bien como propiciatorios y responsables de situaciones instaladas de violencia, hasta las de extrema violencia. Los grupos sectoriales como los de discapacidad y otros como los indígenas denuncian el abandono sistemático y lo que es a la lógica de la violencia: la exclusión de lo diferente hasta su ahogamiento.

Por otro lado, en las propuestas de solución los niños, niñas y adolescentes opinan que es posible detener la violencia a través de “la palabra, el diálogo, el explicar, la comprensión, el entenderse, el respetarse, la denuncia, el cumplimiento de las leyes, acompañar, capacitar, sensibilizar”.

Los niños, niñas y adolescentes apuestan a la organización y la participación como los ejes fundamentales que están en sus manos para incidir y mostrar lo que no se quiere ver. Y cuando hablamos de organización y participación estamos hablando del diálogo y la palabra, cualidades humanas sobre la violencia, que también es una posibilidad humana.

Entre las recomendaciones se encuentra la necesidad de profundizar y difundir estos estudios, en particular con grupos vulnerables como son las personas con discapacidad e indígenas⁸.

⁷ Informe país sobre “Consulta regional a niñas, niños y adolescentes sobre la situación de violencia contra la niñez y la adolescencia”, promovido por Save the Children y elaborado por la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), colectivo de 22 organizaciones que trabajan en el área de la niñez y la adolescencia desde el año 1994.

⁸ Ídem.

LAS UNIVERSIDADES EN LA MIRA DE LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En marzo de 2005 se dio a conocer el informe sobre la integración de las personas con discapacidad en la educación superior en Paraguay, realizado por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” en el marco del Programa Estudios Temáticos sobre la Integración de las Personas con Discapacidad en la Educación Superior en Latinoamérica y el Caribe, con la finalidad de “identificar las características del proceso de integración de las personas con discapacidad al nivel de formación superior y sugerir políticas y estrategias tendientes al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades para la construcción de una sociedad que respete tanto la dignidad como las diferencias de todos los seres humanos”.

De acuerdo al informe, de un total de 23 universidades en todo el país, respondieron 17 universidades privadas y tres universidades públicas. Según este estudio, acceden hoy a la universidad un total de 135 personas con discapacidad, cuando que se estima que el total de población con algún tipo de impedimento alcanza el 15% del total.

El mencionado informe concluye que no existen barreras legales para el acceso de las personas con discapacidad a la educación superior universitaria, pero sí existen barreras socio-económicas, de infraestructura y actitudinales tales como:

- el costo de las universidades privadas;
- la no adecuación del transporte público para los traslados;
- la necesidad de un acompañante para su movilidad;
- la falta de equipos y materiales adecuados que faciliten el aprendizaje;
- limitaciones económicas de las propias universidades, que dificultan la respuesta a las necesidades específicas de este grupo de personas;
- barreras arquitectónicas en los locales universitarios;
- escaso interés por este colectivo debido a la poca cantidad de postulantes; y
- prejuicios y falta de preparación del profesorado.

En resumen, las universidades paraguayas públicas y privadas todavía no han desarrollado una respuesta sistemática para afrontar los desafíos de la discapacidad en cuanto a lo académico, pedagógico, económico, social y tecnológico.

ACCIONES DESDE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Las acciones desarrolladas por las organizaciones de las personas con discapacidad y sus familiares suplen, aunque en forma insuficiente, las obligaciones de prevención, atención, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad no asumidas por el Estado.

A pesar del gran esfuerzo de estas organizaciones y de los logros alcanzados, desarrollan acciones aisladas y desconectadas entre sí debido a la falta de políticas públicas que establezcan prioridades, por lo que los recursos, en gran parte proveídos por el Estado, no alcanzan niveles de eficacia y eficiencia deseables para incidir en una mejor calidad de vida de la población afectada.

Así, en el año 2000, con el apoyo del Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional para la Participación, la Integración y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Glarpipd), las organizaciones de personas con discapacidades se han estado reuniendo regularmente para debatir, acercar propuestas y priorizar acciones en torno a la integración social de las personas. En agosto del mismo año se reunieron en Ciudad del Este, en el local de la Asociación de Padres y Amigos de Minusválidos del Alto Paraná (Apamap), en un foro sobre “La discapacidad en América Latina: tendencias y retos para el nuevo milenio”. En este encuentro se establecieron ciertas propuestas, como el establecimiento de un marco educativo unificado para las personas con una visión inclusiva; incidir para que se establezca una política clara que se eleve con carácter de Estado y establecer estrategias de capacitación del personal; incrementar la cobertura de atención de personas exigiendo equidad en la atención; y trabajar el modelo y las normativas generales jurídicas que sirvan de referencia a los políticos teniendo en cuenta los avances en el mundo, la Declaración de Salamanca⁹, el Programa de Acción Mundial de las Naciones Unidas¹⁰ y las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas¹¹.

Posteriormente, en octubre de ese año, se volvieron a reunir diversas organizaciones para pensar estrategias en busca de soluciones para personas con discapacidad, en Coronel Oviedo, en el local del Centro Ovetense de Ayuda al Niño Impedido Físico (Coanif). En esta ocasión

⁹ *Declaración de Salamanca de Principios, Política y Práctica para las Necesidades Educativas Especiales*, aprobada por aclamación en la ciudad de Salamanca, España (el 10 de junio de 1994) por la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad, convocada por el gobierno español y la Unesco.

¹⁰ *Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad*, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 37/52, del 3 de diciembre de 1982).

¹¹ *Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad* (AG.48/96, del 20 de diciembre de 1993).

se propusieron acciones a ser desarrolladas a nivel gubernamental, tales como:

- la implementación del profesorado en educación especial con el MEC;
- el seguimiento en los institutos de formación docente para hacer cumplir las normas de pasantía obligatoria de los estudiantes en instituciones que cuentan con programas de atención a las necesidades educativas especiales;
- el cumplimiento de las ordenanzas municipales en cuanto al transporte, acceso a los edificios públicos y el mantenimiento de las rampas en las veredas;
- la solicitud de ratificación de las Normas Uniformes de las Naciones Unidas;
- el pedido de revisión de las leyes actuales y proponer modificaciones al Poder Legislativo; y
- la participación en la elaboración de los formularios del ítem discapacidad del Censo Nacional a realizarse en el año 2002.

Aproximadamente 48 organizaciones de la sociedad civil se reunieron desde el año 2000, y finalmente, el 6 de octubre de 2001, conformaron una Coordinadora Nacional por la Promoción Social de las Personas con Discapacidad en San Juan Bautista de las Misiones, con la financiación del Glarpiipd y el apoyo del Inpro, la Dirección de Educación Especial del MEC y la Gobernación de Misiones.

Esta Coordinadora tiene entre otros objetivos “impulsar y contribuir a la eliminación de las prácticas discriminatorias hacia las personas con discapacidad” y “defender y promover los derechos de las personas con discapacidad contenidas en el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas de 1982 y la Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad del año 1993”.

- En el año 2001 la Dirección de Educación Especial del MEC y el Inpro han convocado a encuentros a más de 40 organizaciones no gubernamentales y del gobierno. Estas organizaciones han elaborado en agosto de este año el documento de trabajo “Nuestras propuestas”, que contiene un diagnóstico situacional en legislación, educación, empleo, salud y difusión, a partir de la si-

tuación ideal o deseada, así como un listado de propuestas de acción.

- En el foro "Discapacidad y participación: una cuestión de derechos y oportunidades" (Glarp, 2002) se puntualizó la ausencia de un protagonismo y una participación organizada por parte de las personas con discapacidad, aunque quedó clara la importancia de la participación más activa de dichas personas en la toma de decisiones con relación a las acciones, propuestas y políticas, ya que ellas mismas son y deberían ser las agentes principales de cambio.
- En el año 2003 la Conaprodis ha logrado validar un formulario de denuncias de violaciones a los derechos en dos jornadas de trabajo participativo. Posteriormente este formulario se presentó para su implementación en una reunión con 110 representantes de las Consejerías Municipales por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Codenis) de todo el país.
- Otra de las acciones de la Conaprodis se inicia en junio de 2003, con el apoyo de la fundación Avina, para realizar un autodiagnóstico de las organizaciones miembros y a partir del mismo plantear un proyecto para lograr el fortalecimiento de cada una de ellas a fin de que tengan la capacidad y la fuerza suficiente como para poder incidir en políticas públicas y lograr la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad.

ACCIONES DESARROLLADAS POR CONAPRODIS EN EL PERIODO 2004/2005

Se han realizado en el marco de los objetivos de las organizaciones no gubernamentales participantes y que cuentan con un marco conceptual de acciones en favor de los derechos de las personas con discapacidad actualizado talleres sobre inclusión propuestos a cada organización con la participación de agentes considerados por estas "estratégicos", a fin de lograr acciones que reflejen este marco conceptual.

A partir de las consultas realizadas en este sentido y con la colaboración financiera de Save the Children, se encuentra en periodo de elaboración un informe sobre las formas de discriminación más frecuentes percibidas por dichos agentes locales con la participación de grupos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

Se han iniciado además alianzas a partir de acciones específicas (directorios de organizaciones no gubernamentales, foros permanentes, jornadas de capacitación) a fin de iniciar las acciones en pro de este objetivo. Este trabajo ha finalizado –al menos la etapa de recolección de información a través de redes de organizaciones gubernamentales

y no gubernamentales de todo el país para el directorio- y se tiene prevista su publicación a fines del año 2005.

Se ha avanzado hacia los objetivos propuestos con las planificaciones participativas estratégicas, alianzas para la gestión de acciones específicas y se han iniciado acciones de incidencia a diversos niveles. Se consolidaron contactos para la coordinación de acciones con la SNNA, así como la incorporación de la Conaprodis a la Coordinadora Nacional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia (Conadipi) y la Red Iberoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias (Riadis).

Hay una participación activa y permanente en foros de educación para la diversidad en cooperación con la oficina de la Unesco en Paraguay (a través del MEC). Se tiene una colaboración cercana y permanecen en mesas de trabajo relacionadas a la problemática de la primera infancia, en particular la infancia de 0 a 5 años de edad con discapacidad, logrando incluir en la propuesta Escuela Viva para educación inicial indicadores de selección de proyectos de calidad con componentes de inclusión y un porcentaje para iniciativas nacionales que atiendan puntualmente la discapacidad y la población indígena desde el 2005 hasta el 2008, periodo que durará dicha inversión del MEC y el BID.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Incorporar la discapacidad en la agenda pública mediante políticas, planes y programas específicos, asignándoles recursos humanos, técnicos y financieros, definiendo instituciones, organismos y funcionarios responsables de su cumplimiento y ejecución, con un criterio integrador y de respeto de los derechos de las personas con discapacidad, superando el actual modelo paternalista, asistencialista y paliativo.
- Crear el Consejo Nacional de la Discapacidad con amplia participación de los sectores públicos y privados y especialmente de las personas con discapacidad y sus entidades representativas, a fin de que se constituya en el órgano generador de las políticas públicas, así como en el contralor de su cumplimiento y ejecución.
- Reglamentar, difundir y ejecutar las disposiciones legales relacionadas con la discapacidad, tales como la Ley N° 122/90, la Ley N° 1.925/02 que ratifica la Convención Interamericana para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la Ley N° 2.479/04 que establece la reser-

va de empleos públicos a favor de las personas con discapacidad y la Ley N° 1.885 del año 2002, de la tercera edad.

- Rara asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidad, instituir la carrera de licenciatura en educación especial, o similar, a fin de contar con docentes que puedan acompañar el proceso de inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales en las aulas regulares de los centros de enseñanza de todo el país.
- A fin de garantizar el derecho a la salud de las personas con discapacidad, disponer que por lo menos los hospitales principales de cada departamento cuenten con un servicio de atención temprana, tratamiento y rehabilitación, con profesionales especializados y con los equipos y ayudas técnicas necesarios.